

David Harvey

Ciudades rebeldes
Del derecho de la ciudad
a la revolución urbana

Traducción de
Juanmari Madariaga



Reservados todos los derechos.

De acuerdo a lo dispuesto en el art. 270

del Código Penal, podrán ser castigados con penas de multa y privación de libertad quienes sin la preceptiva autorización reproduzcan, plagien, distribuyan o comuniquen públicamente, en todo o en parte, una obra literaria, artística o científica, fijada en cualquier tipo de soporte.

Título original: *Rebel Cities. From the Right to the City to the Urban Revolution*

© David Harvey, 2012

© Ediciones Akal, S. A., 2013
para lengua española

Sector Foresta, 1
28760 Tres Cantos
Madrid - España

Tel.: 918 061 996

Fax: 918 044 028

www.akal.com

ISBN: 978-84-460-3799-6

Depósito legal: M-8.833-2013

Impreso en Gráficas Varona, S. A.
Salamanca

CAPÍTULO UNO

El derecho a la ciudad

Vivimos en una época en la que los derechos humanos se han situado en primer plano como modelo político y ético. Se dedica mucha energía a su promoción, protección y articulación como pilares para la construcción de un mundo mejor, pero acostumbran a formularse en términos individualistas y basados en la propiedad, y como tales no cuestionan la lógica de mercado liberal y neoliberal hegemónica ni los tipos neoliberales de legalidad y de acción estatal. Después de todo, vivimos en un mundo en el que la propiedad privada y la tasa de ganancia prevalecen sobre todos los demás derechos en los que uno pueda pensar; pero hay ocasiones en las que el ideal de los derechos humanos adopta un aspecto colectivo, como sucede con respecto a los derechos de los trabajadores, mujeres, gays y otras minorías (un legado del añejo movimiento obrero al que en Estados Unidos, por ejemplo, se añade el del movimiento por los derechos civiles durante la década de 1960, sustancialmente colectivo y que alcanzó resonancia global). Tales luchas por los derechos colectivos han obtenido a veces notables resultados.

Aquí quiero explorar otro derecho colectivo, el derecho a la ciudad, aprovechando el resurgimiento del interés por las ideas de Henri Lefebvre sobre este tema y la proliferación en el mundo entero de todo tipo de movimientos sociales que reivindican ese derecho. Ahora bien, ¿cómo puede este definirse?

La ciudad, observó en una ocasión el famoso sociólogo urbano Robert Park, es «el intento más coherente y en general más logrado del hombre por rehacer el mundo en el que vive de acuerdo con sus deseos más profundos. Pero si la ciudad es el mundo creado por el hombre, también es el mundo en el que está desde en-

tonces condenado a vivir. Así pues, indirectamente y sin ninguna conciencia clara de la naturaleza de su tarea, al crear la ciudad el hombre se ha recreado a sí mismo»¹. Si Park estaba en lo cierto, la cuestión de qué tipo de ciudad queremos no puede separarse del tipo de personas que queremos ser, el tipo de relaciones sociales que pretendemos, las relaciones con la naturaleza que apreciamos, el estilo de vida que deseamos y los valores estéticos que respetamos. El derecho a la ciudad es por tanto mucho más que un derecho de acceso individual o colectivo a los recursos que esta almacena o protege; es un derecho a cambiar y reinventar la ciudad de acuerdo con nuestros deseos. Es, además, un derecho más colectivo que individual, ya que la reinención de la ciudad depende inevitablemente del ejercicio de un poder colectivo sobre el proceso de urbanización. La libertad para hacer y rehacernos a nosotros mismos y a nuestras ciudades es, como argumentaré, uno de los más preciosos pero más descuidados de nuestros derechos humanos. ¿Cómo podemos entonces ejercerlo mejor?

Dado que, como afirma Park, hasta ahora no hemos tenido una conciencia clara de la naturaleza de nuestra tarea, puede ser útil comenzar por reflexionar cómo nos ha hecho y rehecho a lo largo de la historia un proceso urbano impulsado por poderosas fuerzas sociales. La asombrosa velocidad y magnitud del proceso de urbanización durante los últimos cien años significa, por ejemplo, que hemos sido recompuestos varias veces sin saber cómo ni por qué. ¿Ha contribuido al bienestar humano esa espectacular urbanización? ¿Nos ha hecho mejores personas, o nos ha dejado en suspenso en un mundo de anomia, alienación, cólera y frustración? ¿Nos hemos convertido en meras mónadas zarandeadas de un lado a otro en un océano urbano? Ese tipo de cuestiones preocupaban durante el siglo XIX a todo tipo de comentaristas, desde Friedrich Engels hasta Georg Simmel, quienes ofrecieron perspicaces críticas del carácter personal que se iba configurando enton-

¹ Robert Park, *On Social Control and Collective Behavior*, Chicago, Chicago University Press, 1967, p. 3.

ces como consecuencia de la rápida urbanización². En la actualidad no es difícil señalar todo tipo de descontentos y ansiedades urbanas en el contexto de transformaciones aún más rápidas, pero parece faltarnos de algún modo el coraje para una crítica sistemática. El vértigo del cambio nos abruma incluso ante interrogantes obvios. ¿Qué podemos hacer, por ejemplo, ante la inmensa concentración de riqueza, privilegios y consumismo en casi todas las ciudades del mundo frente a lo que hasta las Naciones Unidas describen como «un planeta de chabolas»?³.

Reclamar el derecho a la ciudad en el sentido en que yo lo entiendo supone reivindicar algún tipo de poder configurador del proceso de urbanización, sobre la forma en que se hacen y rehacen nuestras ciudades, y hacerlo de un modo fundamental y radical. Desde siempre, las ciudades han brotado de la concentración geográfica y social de un excedente en la producción. La urbanización ha sido siempre, por tanto, un fenómeno relacionado con la división en clases, ya que ese excedente se extraía de algún sitio y de alguien, mientras que el control sobre su uso solía corresponder a unos pocos (ya fuera una oligarquía religiosa o un poeta guerrero con ambiciones imperiales). Esta situación general persiste bajo el capitalismo, evidentemente, pero en este caso se ve sometida a una dinámica bastante diferente. El capitalismo descansa, como nos explicaba Marx, sobre la búsqueda perpetua de plusvalor (beneficio), cuyo logro exige a los capitalistas producir un excedente, lo que significa que el capitalismo produce continuamente el excedente requerido por la urbanización. Pero también se cumple la relación inversa: el capitalismo necesita la urbaniza-

² Friedrich Engels, *The Condition of the Working-Class in England in 1844*, Londres, Penguin Classics, 2009 [orig. en alemán: *Die Lage der arbeitenden Klasse in England*, en MEW Band 2, Berlín, Dietz Verlag, 1972, pp. 225-506]; Georg Simmel, «The Metropolis and Mental Life», en David Levine (ed.), *On Individualism and Social Forms*, Chicago, Chicago University Press, 1971.

³ Mike Davis, *Planet of Slums*, London, Verso, 2006 [ed. cast.: *Planeta de ciudades miseria*, Madrid, Foca, 2008].

ción para absorber el sobreproducto que genera continuamente. De ahí surge una conexión íntima entre el desarrollo del capitalismo y el proceso de urbanización. No puede sorprendernos, por tanto, que la curva logística del crecimiento con el tiempo del producto capitalista sea prácticamente idéntica a la de la urbanización de la población mundial.

Examinemos con más detalle lo que hacen los capitalistas y cómo lo hacen. Comienzan invirtiendo cierta cantidad de dinero que al cabo de un tiempo recuperan aumentada (con un beneficio) y a continuación tienen que decidir qué hacer con el dinero adicional ganado, lo que les supone un dilema fáustico: o bien reinvertirlo para obtener de nuevo más dinero, o consumirlo en placeres. Las leyes irrefragables de la competencia les obligan a reinvertir al menos una parte, para no ser derrotados y apartados por los que sí lo hagan; de forma que para que un capitalista siga siéndolo, debe invertir parte de su excedente en obtener un excedente aún mayor. Los capitalistas con éxito obtienen habitualmente más que suficiente para reinvertir una parte en expandirse y otra en satisfacer su deseo de placeres; pero el resultado de la perpetua reinversión es la expansión de la producción de excedente; y lo que es aún más importante, aunque la tasa media de expansión, digamos anual, fuera constante en términos relativos, al irse acumulando año tras año, el «retorno» (ganancia) sobre la inversión inicial va aumentando exponencialmente (con una tasa compuesta); de ahí todas las curvas logísticas de crecimiento (dinero, capital, producto y población) ligadas a la historia de la acumulación capitalista.

La política del capitalismo se ve afectada por la perpetua necesidad de encontrar campos rentables para la producción y absorción de un excedente de capital. El capitalista afronta así diversos obstáculos para mantener una expansión continua y libre de perturbaciones. Si escasea la mano de obra y los salarios son demasiado altos, entonces habrá que disciplinar a los trabajadores existentes (dos de los métodos principales más frecuentes son el desempleo inducido tecnológicamente y un asalto contra el poder organiza-

do de la clase obrera –sus organizaciones–, como el emprendido por Margaret Thatcher y Ronald Reagan en la década de 1980), o bien hay que encontrar nuevas fuerzas de trabajo (mediante la inmigración, la exportación de capital o la proletarianización de sectores de la población hasta entonces independientes). En particular, hay que encontrar nuevos medios de producción y nuevos recursos naturales, lo que ejerce una presión creciente sobre el entorno para extraer de él las materias primas necesarias y hacerle absorber los inevitables desechos. Las leyes irrefragables de la competencia también obligan a ensayar continuamente nuevas tecnologías y formas organizativas, ya que los capitalistas con mayor productividad pueden desalojar a los que utilizan métodos menos rentables. Las innovaciones definen nuevas carencias y necesidades y reducen el tiempo de rotación del capital y la fricción de la distancia. Se amplía así la extensión geográfica sobre la que el capitalista puede buscar nuevas ofertas de mano de obra, materias primas, etcétera. Si en determinado mercado no existe una capacidad de compra suficiente, hay que encontrar nuevos mercados ampliando el comercio exterior, promoviendo nuevos productos y estilos de vida, creando nuevos instrumentos de crédito y gastos públicos financiados mediante la deuda. Finalmente, si la tasa de beneficio es demasiado baja, se suele recurrir, en busca de una salida, a la regulación estatal de la «competencia ruinosa», la monopolización (fusiones y adquisiciones) y la exportación de capital a nuevos territorios.

Si alguna de las mencionadas barreras a la circulación y expansión continua del capital resulta imposible de eludir, la acumulación de capital queda bloqueada y los capitalistas se encuentran con una crisis. El capital no se puede reinvertir rentablemente, la acumulación se estanca o cesa y el capital resulta devaluado (perdido) y en algunos casos incluso físicamente destruido. La devaluación puede adoptar diversas formas: se pueden devaluar o destruir las mercancías excedentes, puede quedar sin empleo o desvalorizada parte de la capacidad productiva, y hasta el propio dinero puede perder valor debido a la inflación; en una crisis también se

puede devaluar, por supuesto, el trabajo, mediante el desempleo masivo. ¿De qué forma se ha utilizado y se ha visto impulsada entonces la urbanización capitalista por la necesidad de eludir esas barreras y de ampliar el terreno de la actividad capitalista rentable? Argumentaré a este respecto que la urbanización desempeña un papel particularmente activo (junto con otros fenómenos como los gastos militares) en la absorción del producto excedente que los capitalistas producen continuamente en su búsqueda de plusvalor⁴.

Consideremos, para empezar, el caso de París durante lo que se conoce como Segundo Imperio, que duró casi dos décadas, desde 1852 hasta 1870. La crisis de 1848 fue una de las primeras en mostrar claramente ligados a escala europea el desempleo de capital y de trabajo excedentes. Sus efectos fueron particularmente severos en París y dieron lugar a una revolución abortada protagonizada por los obreros desempleados y los utopistas burgueses que propugnaban una república social como antídoto frente a la codicia capitalista y la desigualdad. La burguesía republicana reprimió violentamente a los revolucionarios pero no consiguió resolver la crisis. El resultado fue el ascenso al poder de Luis Napoleón Bonaparte, quien dio un golpe de estado en 1851 y se proclamó emperador con el nombre de Napoleón III en 1852. Para sobrevivir políticamente, aquel emperador autoritario recurrió a una enérgica represión de los movimientos políticos de oposición, pero también sabía que tenía que resolver el problema de la absorción de capital excedente, para lo que impulsó un vasto programa de inversiones en infraestructuras, tanto en el propio país como en el extranjero. En el exterior esto se concretó en la construcción de vías férreas en toda Europa, llegando hasta Estambul, así como en la financiación de grandes obras públicas como el canal de Suez. En Francia supuso la consolidación de la

⁴ Para un repaso más completo de estas ideas, véase David Harvey, *The Enigma of Capital, and The Crises of Capitalism*, London, Profile Books, 2010 [ed. cast.: *El Enigma del Capital y las crisis del capitalismo*, Madrid, Akal, 2012].

red de ferrocarriles, la construcción de puertos, el drenaje de marismas y cosas parecidas, pero sobre todo la reconfiguración de la infraestructura urbana de París. En 1853 el emperador llamó a París a Georges-Eugène Haussmann para que se hiciera cargo de las obras públicas en la capital.

Haussmann entendía perfectamente que su misión consistía en resolver el problema del excedente de capital y mano de obra mediante la urbanización. La reconstrucción de París absorbió enormes cantidades de trabajo y de capital para los niveles de la época, lo que sumado a la supresión autoritaria de las aspiraciones de los obreros de París fue un instrumento esencial de estabilización social. Haussmann echó mano de los planes utópicos propuestos durante la década de 1840 por los fourieristas y saintsimonianos para la reconfiguración de París, pero con una gran diferencia: amplió la escala a la que se había imaginado aquel proceso. Cuando el arquitecto Jacques-Ignace Hittorf le mostró sus planos para un nuevo bulevar, Haussmann los rechazó inmediatamente diciéndole: «No es lo bastante ancho [...] Usted me presenta un diseño de 40 m, y yo quiero 120». Haussmann proyectaba una ciudad a mucha mayor escala y para ello la acrecentó enormemente anexionando los suburbios y rediseñando barrios enteros (como el del mercado de Les Halles), sin limitarse a pequeñas remodelaciones del tejido urbano. Cambió de golpe toda la ciudad en lugar de hacerlo poco a poco. Para hacerlo necesitaba nuevas instituciones financieras e instrumentos de crédito al estilo saintsimoniano (el *Crédit Mobilier* y la *Société Immobilière*). De hecho contribuyó a resolver el problema del excedente de capital disponible mediante un plan de tipo keynesiano de mejoras infraestructurales urbanas financiadas mediante la deuda.

El sistema funcionó bastante bien durante unos quince años y supuso no solo una transformación de las infraestructuras urbanas sino la construcción de una forma de vida y un tipo de habitantes de la ciudad totalmente nuevos. París se convirtió en «la *Ville-Lumière*» y en el gran centro de consumo, turismo y placer: los cafés, los grandes almacenes, el novedoso sector de la

moda, las grandes exposiciones, todo aquello cambió la forma de vida urbana abriendo la posibilidad de absorber grandes excedentes mediante un inmenso consumo (lo que ofendía a los tradicionalistas y al mismo tiempo excluía a los trabajadores). Pero el agigantado sistema financiero, cada vez más especulativo, y las estructuras de crédito en las que se basaba, se vinieron abajo en la crisis financiera de 1868. Haussmann fue destituido y en su desesperación Napoleón III recurrió a la guerra contra la Alemania de Bismarck, que perdió; en el vacío de poder que se produjo surgió la Comuna de París, uno de los mayores episodios revolucionarios de la historia capitalista urbana. La Comuna se debió en parte a la nostalgia del mundo urbano que Haussmann había destruido (sombras de la revolución de 1848) y al deseo de recuperar su ciudad por parte de los desposeídos por sus obras; pero también articuló visiones progresistas en conflicto de una modernidad socialista alternativa a la del capitalismo de los monopolios, enfrentando los ideales de un control jerárquico centralizado (la corriente jacobina) a las visiones descentralizadas anarquistas de control popular (propugnadas por los proudhonianos). En 1872, en medio de intensas recriminaciones sobre quiénes eran los principales responsables del fracaso de la Comuna, se produjo la drástica ruptura política entre los marxistas y los anarquistas que desgraciadamente sigue dividiendo a buena parte de la oposición de izquierda al capitalismo⁵.

Avancemos ahora a Estados Unidos en 1942. El problema del capital excedente que parecía insoluble durante la década de 1930 (y el desempleo que le acompañaba) fueron temporalmente resueltos por la enorme movilización del esfuerzo de guerra, pero todos temían lo que pudiera suceder después. Políticamente la situación era peligrosa. El gobierno federal estaba dirigiendo de hecho una economía nacionalizada (y lo hacía con mucha eficien-

⁵ Este compendio está más desarrollado en David Harvey, *Paris, Capital of Modernity*, Nueva York, Routledge, 2003 [ed. cast: *París, capital de la modernidad*, Madrid, Akal, 2008].

cia). Estados Unidos se había aliado con la Unión Soviética comunista en la guerra contra el fascismo. Como consecuencia de la Gran Depresión, durante la década de 1930 habían surgido fuertes movimientos sociales con inclinaciones de izquierda y sus simpatizantes se habían incorporado al esfuerzo de guerra. Todos conocemos la subsiguiente historia del macartismo y la Guerra Fría (de la que ya había abundantes presagios en 1942). Como en el caso de Luis Bonaparte, las clases dominantes de la época necesitaron evidentemente una generosa dosis de represión política para reafirmar su poder. ¿Pero qué pasó con el problema del capital excedente sin posibilidad de inversión rentable?

En 1942 apareció en la revista *Architectural Forum* una detallada evaluación de los esfuerzos de Haussmann, documentando en detalle lo que este había hecho en París y ofreciendo incluso un análisis de sus errores. El artículo iba firmado nada menos que por Robert Moses, quien después de la Segunda Guerra Mundial hizo en la región metropolitana de Nueva York lo que Haussmann había hecho antes en París⁶, al cambiar la escala de pensamiento sobre la urbanización e incluir en sus planes toda la región metropolitana y no solo la ciudad en sentido estricto. Mediante un sistema de autopistas y transformaciones infraestructurales financiado mediante la emisión de deuda, el desplazamiento de las capas acomodadas a urbanizaciones periféricas y la remodelación de toda la región metropolitana, ofreció una vía para absorber rentablemente los excedentes de capital y de mano de obra. Cuando ese proceso se reprodujo a escala nacional en los principales centros metropolitanos de Estados Unidos (otra ampliación de escala), desempeñó un papel crucial en la estabilización del capitalismo global después de la guerra (un periodo en el que Estados Unidos podía permitirse propulsar toda la economía no comunista incurriendo en déficits comerciales).

⁶ Robert Moses, «What Happened to Haussmann», *Architectural Forum* 77 (julio de 1942), pp. 57–66; Robert Caro, *The Power Broker: Robert Moses and the Fall of New York*, Nueva York, Knopf, 1974.

Esa suburbanización o «dispersión hacia las afueras» no fue solo cuestión de nuevas infraestructuras. Tal como había sucedido en París durante el Segundo Imperio, suponía una transformación radical del modo de vida, basada en la producción y comercialización de nuevos productos, desde las hileras de casas individuales idénticas de uno o dos pisos con dos coches a la puerta hasta los frigoríficos y acondicionadores de aire, que junto a la enorme expansión del consumo de petróleo favoreció la absorción del excedente. La suburbanización (junto con la militarización) desempeñó así un papel decisivo en la absorción de los excedentes de capital y trabajo en los años de posguerra, pero a costa de vaciar el centro de las ciudades y dejarlas desprovistas de una base económica sostenible, lo que dio lugar a la llamada «crisis urbana» de la década de 1960, caracterizada por las revueltas de las minorías afectadas (principalmente la de los afroamericanos), a las que se negaba el acceso a la reciente prosperidad.

Pero la rebelión no se limitaba al centro de las ciudades. Los urbanistas más apegados a la tradición hicieron piña en torno a Jane Jacobs, tratando de contraponer al brutal modernismo de los proyectos a gran escala de Moses un tipo distinto de estética urbana centrada en el desarrollo de los antiguos barrios, su preservación histórica y en último término su gentrificación. Pero para entonces ya se habían construido muchísimas urbanizaciones periféricas y la transformación radical del modo de vida que esto conllevaba tenía todo tipo de consecuencias sociales; muchas feministas, por ejemplo, situaban entre sus principales causas de descontento la perifерización y su estilo de vida. Tal como le sucedió a Haussmann, a finales de la década de 1960 se generó una crisis financiera que socavó el prestigio de aquel proceso (y del propio Moses) y le hizo perder el favor popular; y de la misma forma que la haussmannización de París potenció de algún modo la erupción de la Comuna, la insipidez de la vida en las urbanizaciones periféricas desempeñó cierto papel en los espectaculares movimientos de protesta de 1968 en Estados Unidos, cuando los descontentos estudiantes blancos de clase media se sumaron a la rebelión bus-

cando alianzas con otros grupos marginados y uniéndose contra el imperialismo estadounidense para crear un movimiento que pretendía construir otro tipo de mundo, incluido un tipo distinto de experiencia urbana (aunque, una vez más, las corrientes anarquistas y libertarias divergían de las propuestas alternativas jerárquicas y centralizadas)⁷.

Junto con la rebelión de 1968 eclosionó una crisis financiera. Era en buena medida global (con el colapso de los acuerdos de Bretton Woods), pero también propiciada por el comportamiento de las instituciones de crédito que habían impulsado el *boom* inmobiliario durante las décadas precedentes. Aquella crisis cobró impulso a finales de la década de 1960, hasta extenderse a todo el sistema capitalista con el estallido de la burbuja inmobiliaria en 1973, seguido por la bancarrota presupuestaria de la ciudad de Nueva York en 1975. Habían llegado los oscuros años de la década de 1970, durante los que se planteó la cuestión de cómo rescatar al capitalismo de sus propias contradicciones. Sirviéndose de la historia como guía, el proceso de urbanización iba a desempeñar un papel muy significativo. Como mostró William Tabb, la salida de la crisis fiscal de Nueva York en 1975, concertada por una incómoda alianza entre los poderes estatales y las instituciones financieras, anunció el giro neoliberal que se iba a dar en todo el mundo en la lucha por perpetuar y consolidar el poder de la clase capitalista a expensas del nivel de vida de la clase obrera, desregulando el mercado para que cumpliera su función. Pero la cuestión que quedaba en pie era cómo resucitar la capacidad de absorber los excedentes que el capitalismo está obligado a producir si pretende sobrevivir⁸.

⁷ Henri Lefebvre, *The Urban Revolution*, Minneapolis, University of Minnesota Press, 2003 [ed. orig.: *La révolution urbaine*, París, Gallimard, 1970].

⁸ William Tabb, *The Long Default: New York City and the Urban Fiscal Crisis*, New York, Monthly Review Press, 1982; David Harvey, *A Brief History of Neoliberalism*, Oxford, Oxford University Press, 2005 [ed. cast.: *Breve historia del neoliberalismo*, Madrid, Akal, 2007].

Pero sigamos avanzando hasta el momento actual. El capitalismo internacional había entrado en una montaña rusa de crisis y bancarrotas regionales (el este y sureste de Asia en 1997-98, Rusia en 1998, Argentina en 2001, etcétera) hasta que sufrió un *crac* global en 2008. ¿Cuál ha sido el papel de la urbanización en esta historia? En Estados Unidos todo el mundo creía hasta 2008 que el mercado de la vivienda era un importante estabilizador de la economía, en particular tras la debacle de las empresas informáticas y de alta tecnología a finales de la década de 1990. El mercado inmobiliario absorbía directamente gran parte del excedente de capital dedicándolo a nuevas construcciones (tanto viviendas en el interior y en la periferia de las ciudades como nuevos edificios de oficinas), mientras que la rápida inflación del precio de la vivienda, respaldada por una pródiga oleada de refinanciaciones hipotecarias con tipos de interés históricamente bajos, impulsaba el mercado interno estadounidense de servicios y bienes de consumo. El mercado global se estabilizó en parte gracias a la expansión urbana estadounidense y a la especulación en el mercado inmobiliario, mientras Estados Unidos incurría en un enorme déficit comercial con el resto del mundo, endeudándose alrededor de 2 millardos de dólares al día para alimentar su consumismo insaciable y las guerras financiadas mediante la deuda en Afganistán e Iraq durante la primera década del siglo XXI.

Pero el proceso de urbanización experimentó mientras tanto otra ampliación de escala, haciéndose planetario, por lo que no podemos concentrarnos únicamente en Estados Unidos. La enorme expansión del mercado inmobiliario en Gran Bretaña, Irlanda y España, así como en muchos otros países, ayudó a mantener la dinámica capitalista de forma muy parecida en general a la de Estados Unidos. La urbanización de China durante los últimos veinte años, como veremos el capítulo 2, ha sido de un carácter radicalmente diferente, concentrándose en buena medida en la construcción de infraestructuras. Su velocidad aumentó enormemente tras una breve recesión hacia 1997. Más de un centenar de ciudades han sobrepasado el millón de habitantes en los últimos

veinte años, y pequeñas ciudades como Shenzhen se han convertido en gigantescas metrópolis de entre seis y diez millones de habitantes. La industrialización, concentrada al principio en las «zonas económicas especiales», se extendió luego rápidamente a cualquier municipio dispuesto a absorber el capital excedente extranjero y a reinvertir los beneficios en una rápida expansión. Vastos proyectos infraestructurales, como presas y autopistas –de nuevo, todos ellos financiados mediante la deuda– están transformando el paisaje⁹. Centros comerciales igualmente gigantescos, parques científicos, aeropuertos, puertos, palacios de entretenimiento de todo tipo y gran variedad de instituciones culturales nuevas, junto con urbanizaciones valladas y campos de golf para los ricos, salpican el paisaje chino en medio de ciudades-dormitorio superatadas para las enormes reservas de mano de obra que se desplazan desde las regiones rurales empobrecidas. Como veremos, las consecuencias de este proceso de urbanización para la economía global y para la absorción de capital excedente han sido enormes.

Pero China es solo el centro más notable de un proceso de urbanización que se ha hecho auténticamente planetario, en parte mediante la asombrosa integración global de los mercados financieros que aprovechan su flexibilidad para financiar mediante la deuda proyectos urbanos que proliferan en todas partes, desde Dubai hasta São Paulo y desde Madrid hasta Bombay, Hong Kong o Londres. El Banco Central Chino, por ejemplo, participa activamente en el mercado hipotecario secundario en Estados Unidos, mientras que Goldman Sachs ha intervenido con fuerza en el emergente mercado inmobiliario en Bombay y el capital de Hong Kong ha invertido en Baltimore. Cualquier área urbana del mundo ha visto cómo se inflaba su burbuja inmobiliaria al tiempo que aumentaba sin freno la afluencia de inmigrantes empobrecidos, a medida que el campesinado rural se veía desposeído debido a la industrialización y comercialización de la agricultura.

⁹ Thomas Campanella, *The Concrete Dragon: China's Urban Revolution and What it Means for the World*, Princeton, Princeton Architectural Press, 2008.

El *boom* inmobiliario ha sido evidente en Ciudad de México, Santiago de Chile, Bombay, Johannesburgo, Seúl, Taipei, Moscú y toda Europa (el caso de España ha sido el más espectacular), así como en las grandes ciudades de los principales países capitalistas, como Londres, Los Ángeles, San Diego y Nueva York (donde la administración del multimillonario alcalde Michael Bloomberg puso en marcha en 2007 más proyectos urbanos a gran escala que nunca). En algunos lugares de Oriente Medio como Dubai y Abu Dhabi han surgido proyectos urbanísticos asombrosos, espectaculares y en ciertos aspectos criminalmente absurdos, como forma de absorber los excedentes del capital surgidos de la riqueza petrolífera de la forma más lujosa, socialmente injusta y medioambientalmente ponzoñosa posible (como una pista de esquí en medio del ardiente desierto). Asistimos así a otro gran cambio de escala en el proceso de urbanización, que hace difícil captar que lo que está sucediendo globalmente es en principio similar a los procesos de que Haussmann gestionó tan hábilmente durante un tiempo en el París del Segundo Imperio.

Pero esta nueva oleada urbanizadora dependía, como las anteriores, de la creación de nuevas instituciones e instrumentos financieros que permitieran canalizar los créditos requeridos para mantenerla. Las innovaciones financieras puestas en marcha en la década de 1980, en particular la titulización y empaquetamiento de hipotecas locales para venderlas a inversores de todo el mundo y la creación de nuevas instituciones financieras que facilitarían la creación de un mercado hipotecario secundario y la emisión y venta de Obligaciones de Deuda Garantizadas [CDOs, Collateralized Debt Obligations] han desempeñado un papel decisivo. Las ventajas eran muchas: minimizaba el riesgo al dispersarlo y permitía a los depósitos de ahorros excedentes un acceso más fácil a la demanda excedente de vivienda, permitiendo además, en virtud de su coordinación, una reducción global de los tipos de interés (al tiempo que generaba inmensas fortunas para los intermediarios financieros que gestionaban aquellas maravillas). Pero dispersar el riesgo no significaba eliminarlo. Además, el hecho de que se pudiera

repartir tan ampliamente alentaba inversiones aún más arriesgadas, que supuestamente transferían el riesgo a otro lugar. Sin controles adecuados de valoración del riesgo, el mercado hipotecario se podía desbocar, y lo que les sucedió a los hermanos Péreire en 1867-1868 en París con el *Crédit Mobilier* y al ayuntamiento de Nueva York a mediados de la década de 1970 volvió a suceder en 2008 con las hipotecas *subprime* y la crisis de los activos inmobiliarios. La crisis se concentró primero en las ciudades estadounidenses y sus alrededores (aunque se podían detectar señales similares en Gran Bretaña), con consecuencias particularmente severas para los afroamericanos de bajos ingresos y hogares monoparentales a cargo de mujeres, afectando también a quienes, incapaces de permitirse los elevadísimos precios de la vivienda en los centros urbanos, especialmente en el suroeste estadounidense, se trasladaron a la semiperiferia de los centros metropolitanos, donde al principio podían pagar tipos de interés bajos por casas adosadas ya construidas especulativamente, pero luego tuvieron que afrontar gastos de desplazamiento crecientes a medida que subía el precio del petróleo al tiempo que aumentaban sus cuotas hipotecarias en consonancia con la tendencia ascendente del mercado. Las crueles consecuencias de la crisis sobre la vida urbana y las infraestructuras (barrios enteros de ciudades como Cleveland, Baltimore y Detroit se han visto devastados por la oleada de desahucios) hacían tambalearse toda la estructura del sistema financiero global y amenazaban desencadenar una importante recesión. Los paralelismos con la crisis de la década de 1970 son, por decirlo suavemente, pasmosos, incluida la respuesta de la Reserva Federal abaratando el dinero, lo que casi con seguridad generará en el futuro fuertes tensiones inflacionistas, como sucedió entonces.

Pero la situación es mucho más complicada ahora y no está nada claro si un severo *crac* en Estados Unidos podría verse compensado por la expansión en otro lugar (por ejemplo en China). El desarrollo geográfico desigual puede quizá rescatar de nuevo al sistema y salvarlo de una bancarrota total, como sucedió en la década de 1990, aunque ahora sea Estados Unidos el que está en

el centro del problema. Pero el sistema financiero está también ahora mucho más estrechamente entrelazado que antes¹⁰. Las transacciones comerciales realizadas instantáneamente en la red sin ninguna supervisión siempre amenazan con crear una gran divergencia en el mercado (como muestra la increíble volatilidad de los mercados bursátiles) capaz de generar una crisis masiva que exigirá repensar de arriba abajo el funcionamiento del capital financiero y de los mercados monetarios, incluida su relación con la urbanización.

Al igual que en otras ocasiones, la reconfiguración de la geografía urbana ha traído consigo grandes cambios en el estilo de vida. La calidad de la vida urbana se ha convertido en una mercancía para los que tienen dinero, como lo ha hecho la propia ciudad en un mundo en el que el consumismo, el turismo, las actividades culturales y basadas en el conocimiento, así como el continuo recurso a la economía del espectáculo, se han convertido en aspectos primordiales de la economía política urbana hasta en la India y China. La proclividad posmoderna a la formación de nichos de mercado –en las opciones de modo de vida, hábitos de consumo y normas culturales– confiere a la vida urbana contemporánea una aura de libertad de elección, con tal que uno tenga el dinero suficiente y pueda protegerse frente a la privatización de la redistribución de riqueza mediante actividades criminales y prácticas fraudulentas depredadoras (que se han multiplicado en todas partes). Proliferan los centros comerciales e hipermegastores (cuya construcción se ha convertido asimismo en un gran negocio), así como los centros de comida rápida y mercadillos artesanales, bazares ocasionales, cafeterías de ambiente y establecimientos por el estilo en los que se practica, como dice socarronamente Sharon Zukin, la «pacificación mediante el *cappuccino*». El desarrollo su-

¹⁰ Richard Bookstaber, *A Demon of Our Own Design: Markets, Hedge Funds, and the Perils of Financial Innovation*, Nueva York, Wiley, 2007; Frank Partnoy, *Infectious Greed: How Deceit and Risk Corrupted Financial Markets*, Nueva York, Henry Holt, 2003.

burbano incoherente, anodino y monótono que sigue dominando en muchas partes del mundo encuentra ahora un revulsivo en el «nuevo urbanismo» que proclama las excelencias de la vida en comunidades apartadas (supuestamente íntimas y seguras, a menudo valladas y cerradas al exterior) en las que los promotores inmobiliarios prometen un estilo de vida refinado supuestamente capaz de cumplir todos los sueños urbanos. Es un mundo en el que la ética neoliberal del intenso individualismo posesivo puede convertirse en pauta para la socialización de la personalidad humana. Su efecto es el creciente aislamiento individualista, la ansiedad y la neurosis en medio de uno de los mayores logros sociales (al menos a juzgar por su enorme envergadura y su generalización a todos los niveles) jamás construido en la historia humana para la realización de nuestros deseos más profundos.

Pero las fisuras en el sistema son también muy evidentes. Vivimos en ciudades cada vez más divididas, fragmentadas y proclives al conflicto. La forma en que vemos el mundo y definimos nuestras posibilidades depende del lado de la barrera en que nos hallemos y del nivel de consumo al que tengamos acceso. En las últimas décadas el giro neoliberal ha restaurado el poder de clase de las elites más ricas¹¹. En un solo año los directivos de los principales fondos de inversión en Nueva York obtuvieron 3 millardos de dólares en remuneraciones personales y las primas de Wall Street han aumentado vertiginosamente durante los últimos años, desde alrededor de 5 millones de dólares hasta llegar a 50 millones para los principales protagonistas (situando los precios del suelo en Manhattan a una altura inalcanzable). En México han aparecido catorce milmillonarios desde el giro neoliberal de finales de la década de 1980, entre los que se cuenta el hombre más rico de la tierra, Carlos Slim, al mismo tiempo que los ingresos de los pobres en ese país se han estancado o han disminuido. A finales de 2009 (después de que hubiera pasado lo peor de la crisis), había en

¹¹ D. Harvey, *A Brief History of Neoliberalism*, cit.; Thomas Edsall, *The New Politics of Inequality*, Nueva York, Norton, 1985.

China 115 milmillonarios, 101 en Rusia, 55 en la India, 52 en Alemania, 32 en Gran Bretaña y 30 en Brasil, además de los 413 de Estados Unidos¹². Los resultados de esta creciente polarización en la distribución de la riqueza y el poder están indeleblemente grabados en las formas espaciales de nuestras ciudades, en las que se van condensando progresivamente fragmentos fortificados, comunidades cercadas y espacios públicos privatizados bajo una vigilancia constante. La protección neoliberal de los derechos de propiedad privada y sus valores se convierte en una forma hegemónica de política, incluso para la clase media baja. En el mundo en desarrollo, en particular, la ciudad

se está dividiendo en partes separadas, en las que parecen formarse muchos «microestados». Los vecindarios ricos provistos de todo tipo de servicios, tales como escuelas exclusivas, campos de golf y de tenis y patrullas de policía privada que recorren el área continuamente, se ven rodeadas por asentamientos ilegales donde solamente se puede obtener agua en las fuentes públicas, no existen sistemas de evacuación de residuos ni de recogida de basuras, la electricidad solo está al alcance de unos pocos privilegiados, las calles se convierten en barrizales siempre que llueve y lo normal es compartir la vivienda entre varias familias. Cada fragmento parece vivir y funcionar autónomamente, aferrándose firmemente a lo que ha sido capaz de proveerse en la lucha cotidiana por la supervivencia¹³.

En esas condiciones los ideales de identidad urbana, ciudadanía y pertenencia, y de una política urbana coherente, ya amenazados por la creciente difusión de la ética neoliberal individualista, se hacen mucho más difíciles de sostener. Hasta la idea de que la ciudad podría funcionar como un cuerpo político colectivo, un

¹² Jim Yardley y Vikas Bajaj, «Billionaires' Ascent Helps India, and Vice Versa», *New York Times*, 27 de julio de 2011.

¹³ Marcello Balbo, «Urban Planning and the Fragmented City of Developing Countries», *Third World Planning Review* 15/1 (1993), pp. 23–25.

lugar en y del que podrían emanar movimientos sociales progresistas, parece, al menos superficialmente, cada vez menos creíble. Aun así, de hecho hay todo tipo de movimientos sociales urbanos que tratan de superar el aislamiento y de reconfigurar la ciudad respondiendo a una imagen social diferente de la ofrecida por los poderes de los promotores respaldados por el capital financiero y empresarial y un aparato estatal con mentalidad de negociante. Incluso administraciones urbanas relativamente conservadoras tratan de emplear su poder para experimentar nuevas formas de producir lo urbano y de democratizar su gobernanza. ¿Existe una alternativa urbana, y en tal caso, de dónde podría provenir?

La absorción del excedente mediante la transformación urbana tiene empero un aspecto aún más tenebroso: ha supuesto repetidas rachas de reestructuración urbana mediante una «destrucción creativa» que casi siempre tiene una dimensión de clase, ya que suelen ser los más pobres y menos privilegiados, los marginados del poder político, los que más sufren en esos procesos.

Para hacer surgir la nueva geografía urbana del derrumbe de la antigua se requiere siempre violencia. Haussmann hizo derribar los viejos barrios de París empleando poderes excepcionales de expropiación, supuestamente en beneficio público, en nombre de los derechos de ciudadanía, la restauración ambiental y la renovación urbana. Consiguió así deliberadamente expulsar del centro de París, junto con las industrias insalubres, a gran parte de la clase obrera y otros elementos rebeldes que constituían una amenaza para el orden público y por supuesto para el poder político, creyendo (incorrectamente, como se comprobó en la Comuna revolucionaria de París de 1871) que aquella reforma urbana ofrecía un nivel suficiente de vigilancia y control militar como para asegurar el fácil sometimiento por la fuerza de las clases rebeldes. Pero como ya señalaba Friedrich Engels en su folleto de 1872 *Sobre el problema de la vivienda [Zur Wohnungsfrage]*:

En realidad la burguesía solo dispone de un método para resolver a su modo el problema de la vivienda, esto es, de resolverlo de forma que

se perpetúa, y ese método se llama «haussmannización» [como yo denominaría a] la práctica generalizada de la apertura de brechas en los barrios obreros, particularmente en los situados en el centro de nuestras grandes ciudades, dejando a un lado que se justifique por razones de salud pública, de embellecimiento de la ciudad, de demanda de grandes edificios de negocios en el centro o por exigencias del tráfico como el tendido de vías férreas, la ampliación de las avenidas, etcétera. Por diferentes que sean las razones aducidas, el resultado es siempre el mismo: los callejones más escandalosos desaparecen con gran contento de la burguesía por su colosal éxito, pero aparecen de nuevo en algún otro lugar, a menudo muy cerca [...] Los focos de las epidemias, los infames agujeros y calabozos en los que el modo capitalista de producción confina a nuestros trabajadores una noche tras otra, no son erradicados, ¡sino que simplemente *se desplazan a otro lugar!* La misma necesidad económica que los generó antes los reproduce ahora¹⁴.

De hecho llevó más de cien años completar la conquista burguesa del centro de París, con las consecuencias que hemos visto en los últimos años: levantamientos y disturbios en los suburbios aislados en los que se ven cada vez más atrapados los emigrantes marginados, los obreros desempleados y los jóvenes. Lo más triste es que los procesos que describía Engels se siguen reproduciendo una y otra vez a lo largo de la historia del urbanismo capitalista. Robert Moses le dio «un hachazo al Bronx» (con sus propias infames palabras) que provocó largas y sonoras lamentaciones de los grupos y movimientos vecinales, finalmente condensadas en la retórica de Jane Jacobs sobre la inimaginable destrucción de un valioso tejido urbano así como la pérdida de comunidades enteras de residentes y sus arraigadas redes de integración social¹⁵. Pero

¹⁴ Friedrich Engels, *The Housing Question*, Nueva York, International Publishers (1935), pp. 74–77 [orig. en alemán: *Zur Wohnungsfrage*, en MEW Band 18, Berlín, Dietz Verlag, 1973, pp. 260-261].

¹⁵ Marshall Berman, *All That Is Solid Melts Into Air*, Londres, Penguin, 1988 [ed. cast.: *Todo lo sólido se desvanece en el aire*, Madrid, Siglo XXI de España, 2000].

en los casos de París y Nueva York, después de que las brutales expropiaciones a cargo del estado se vieron frenadas por la agitación política y las luchas callejeras del 68, comenzó un proceso de transformación mucho más insidioso y canceroso mediante el sometimiento de los gobiernos democráticos urbanos a la disciplina presupuestaria, la liberalización del mercado del suelo y de la vivienda, la especulación inmobiliaria y la recalificación del suelo urbano para los usos que generaban la tasa de ganancia financiera más alta. Engels entendía muy bien de qué iba todo ese proceso:

El crecimiento de las grandes ciudades modernas da al suelo en ciertas áreas, particularmente en las situadas cerca del centro, un valor artificial mucho mayor; los edificios construidos en esas áreas disminuyen ese valor en lugar de aumentarlo, porque ya no corresponden a las nuevas circunstancias; por eso son derribados y sustituidos por otros. Esto sucede sobre todo con las viviendas de los trabajadores situadas cerca del centro, cuyos alquileres, a pesar de la gran cantidad de gente que en ellas se aloja, nunca pueden aumentar más allá de un límite, o en todo caso lo hacen muy lentamente. Por ello son derribadas y en su lugar se construyen nuevas tiendas, almacenes y edificios públicos¹⁶.

Resulta deprimente pensar que todo esto se escribiera en 1872, ya que la descripción de Engels se puede aplicar directamente a los actuales procesos urbanos en gran parte de Asia (Nueva Delhi, Seúl, Bombay), así como a la actual gentrificación de ciertas áreas de Nueva York como Harlem y Brooklyn. La creación de nuevas geografías urbanas bajo el capitalismo supone inevitablemente desplazamiento y desposesión, como horrorosa imagen especular de la absorción de capital excedente mediante el desarrollo urbano. Considérese el caso de Bombay y sus áreas urbanas aledañas, donde 6 millones de sus habitantes son considerados oficialmente

¹⁶ Friedrich Engels, *The Housing Question*, cit., p. 23 [ed. cast.: *Zur Wohnungsfrage*, cit., p. 215].

chabolistas, alojados en su mayor parte en terrenos sin propietario legal (los lugares donde viven aparecen en blanco en todos los planos de la ciudad). El intento de convertir Bombay en un centro financiero global capaz de rivalizar con Shanghái ha acelerado el *boom* de la construcción y el suelo que ocupan los «asentamientos irregulares» ha aumentado increíblemente de valor año tras año. El de Dharavi, uno de los barrios chabolistas más conocidos de Bombay, se estima en torno a los 2 millardos de dólares, y la presión para desalojar a sus habitantes –aduciendo razones ambientales y sociales– aumenta día tras día. Los poderes financieros respaldados por el estado presionan en favor de un desalojo por la fuerza, tomando posesión a veces violentamente de un terreno ocupado desde hace una generación por los chabolistas. La acumulación de capital mediante la actividad inmobiliaria se multiplica, dado que el coste del suelo es prácticamente nulo. ¿Recibe alguna compensación la gente obligada a abandonar sus chabolas? Los más afortunados han recibido algunas rupias, pero aunque la Constitución india proclama que el estado está obligado a proteger la vida y el bienestar de toda la población, sin hacer diferencias por razones de casta o de clase, y a garantizar su derecho a la vivienda, el Tribunal Supremo ha reescrito esa exigencia constitucional: los ocupantes ilegales que no pueden demostrar fehacientemente su asentamiento durante largo tiempo en el suelo que ocupan no tienen derecho a compensación alguna, porque reconocer ese derecho, dice el Tribunal Supremo, equivaldría a premiar a los ladronzuelos y carteristas por sus acciones. Así, los chabolistas se ven obligados a resistir y a luchar, o a empaquetar sus escasas pertenencias y acampar al borde de las autovías o donde puedan encontrar un diminuto espacio¹⁷. Ejemplos similares de desposesión (aunque menos brutales y más legales) se pueden en-

¹⁷ Usha Ramanathan «Illegality and the Urban Poor», *Economic and Political Weekly*, 22 de julio de 2006; Rakesh Shukla, «Rights of the Poor: An Overview of Supreme Court», *Economic and Political Weekly*, 2 de septiembre de 2006.

contrar en Estados Unidos, donde se abusa del derecho a la expropiación para desplazar a quienes residían desde hace tiempo en una vivienda razonable, en favor de usos más rentables del suelo (tales como los bloques de apartamentos y los grandes almacenes). En el Tribunal Supremo estadounidense los jueces liberales prevalecieron sobre los conservadores diciendo que era perfectamente constitucional que las jurisdicciones locales se comportaran de esa forma a fin de aumentar la base de su recaudación de impuestos.

En Seúl, durante la década de 1990, las empresas constructoras y los promotores inmobiliarios contrataron escuadrones de luchadores de sumo para invadir barrios enteros y aplastar a mazazos no solo las viviendas sino también las posesiones de quienes se habían asentado cuatro o cinco décadas antes en las colinas que ahora se habían convertido en un terreno de gran valor. La mayoría de sus laderas han quedado cubiertas por grandes rascacielos que no muestran ninguna huella del brutal proceso de desposesión que permitió su construcción. En China se está desposeyendo actualmente a millones de personas del espacio que llevaban ocupando toda la vida. Dado que carecen de derechos de propiedad privada, el estado puede expulsarlos simplemente con una orden administrativa, ofreciéndoles como mucho un pequeño pago en efectivo para facilitarles el traslado (antes de entregar el suelo a los promotores con una elevada tasa de ganancia). En algunos casos la gente se va sin más, pero también llegan noticias de encarnizadas resistencias, la respuesta a las cuales suele ser una brutal represión por parte de las autoridades. La población rural de los alrededores de las grandes ciudades se ve desplazada sin mucha ceremonia al expandirse estas, como ya había vaticinado Lefebvre en los años sesenta presintiendo que la clara distinción de otro tiempo entre la ciudad y el campo parecía irse difuminando gradualmente dando lugar a espacios porosos con un desarrollo geográfico desigual bajo el dominio del capital y del estado. En China las comunas rurales en los alrededores de las ciudades (o al menos los líderes locales del partido) pasaron del agotador trabajo de cultivar coles al relajado estatus de rentistas urbanos al cons-

truirse en ellas, prácticamente de la noche a la mañana, grandes bloques de apartamentos. Así sucede igualmente en la India, donde la política de zonas especiales de desarrollo económico promovida por el gobierno central y los gobiernos estatales ha acabado convirtiéndose en una violencia descarnada contra los productores agrícolas, como en el caso de la masacre de Nandigram (Bengala occidental) en 2007 ordenada por el «Frente de Izquierdas» gobernante* con el fin de abrir espacios para la inversión de grandes capitales indonesios, tan interesados en el desarrollo urbano como en el industrial. En este caso los derechos de propiedad privada no supusieron ninguna protección.

Y lo mismo sucede con la propuesta aparentemente progresista de conceder derechos de propiedad privada a las poblaciones *okupas*, ofreciéndoles bienes que les permitirían salir de la pobreza. Ese es el tipo de propuesta ofrecido a los *favelados* de Río de Janeiro, pero el problema es que los pobres, acuciados por la inseguridad de sus ingresos y sus frecuentes dificultades financieras, pueden fácilmente ser persuadidos de venderlos a un precio en efectivo relativamente bajo (los ricos se niegan en cambio a renunciar de ningún modo a sus propiedades, por lo que Moses, a quien no le resultó muy difícil dar su «hachazo» en el Bronx, donde la mayoría de la gente contaba con muy bajos ingresos, no pudo hacer lo mismo en la opulenta Park Avenue). Yo apostaría a que, si se mantiene la tendencia actual, dentro de quince años todas esas colinas ahora ocupadas por favelas estarán cubiertas por grandes bloques de apartamentos con fabulosas vistas a la bahía de Río, mientras que los antiguos *favelados* habrán sido desplazados a alguna periferia remota¹⁸. El efecto a largo plazo de la

* Que en las elecciones de abril-mayo de 2011 perdió el poder que había ejercido durante 34 años. [N. del T.]

¹⁸ Buena parte de estas ideas provienen de la obra de Hernando de Soto, *The Mystery of Capital: Why Capitalism Triumphs in the West and Fails Everywhere Else*, Nueva York, Basic Books, 2000; véase el repaso crítico de Timothy Mitchell, «The Work of Economics: How a Discipline Makes its World», *Archives Européennes de Sociologie* 46/2 (2005), pp. 297-320.

privatización por Margaret Thatcher de las viviendas sociales en el centro de Londres ha sido crear una estructura de alquileres y precio de la vivienda en toda el área metropolitana que impide que la gente con bajos ingresos e incluso la de clase media pueda acceder a una vivienda cerca del centro urbano. El problema de la vivienda, como el de la pobreza y la accesibilidad, se ha ido desplazando de un lugar a otro.

Esos ejemplos nos advierten de la existencia de toda una batería de soluciones aparentemente «progresistas» que no solo desplazan el problema sino que de hecho lo refuerzan, al mismo tiempo que alargan la cadena dorada que aprisiona a poblaciones vulnerables y marginadas dentro del cerco de la circulación y acumulación del capital. Hernando de Soto argumentaba que es la falta de derechos claros de propiedad la que mantiene en la miseria a los pobres en gran parte del Sur Global (ignorando el hecho de que la pobreza también abunda en sociedades donde están claramente establecidos los derechos de propiedad). Evidentemente, habrá casos en que la concesión de tales derechos en las favelas de Río o en los barrios pobres de Lima libere energías individuales y afanes empresariales que permitan el avance personal de algunos, pero el efecto global suele ser el de destruir los modos colectivos de solidaridad social y apoyo mutuo, no basados en la maximización del beneficio, sin favorecer el alivio conjunto de la población a falta de un empleo seguro y adecuadamente remunerado. Julia Elyachar, por ejemplo, señala que en El Cairo esas políticas aparentemente progresistas han creado un «mercado de la desposesión» que de hecho absorbe valor de una economía moral basada en el respeto mutuo y la reciprocidad, en beneficio de las instituciones capitalistas¹⁹.

Esa misma crítica se puede aplicar en buena medida a las soluciones para la pobreza global basadas en los microcréditos y microfinanzas, voceadas tan persuasivamente desde las instituciones

¹⁹ Julia Elyachar, *Markets of Dispossession: NGOs, Economic Development, and the State in Cairo*, Chapel Hill, Duke University Press, 2005.

financieras de Washington. En su encarnación social (tal como los proponía originalmente el premio Nobel de la Paz Muhammad Yunus) los microcréditos han abierto efectivamente nuevas posibilidades y han tenido un efecto significativo sobre las relaciones de género, con consecuencias positivas para las mujeres, en países como India y Bangladesh; pero al mismo tiempo imponen sistemas de responsabilidad colectiva para el pago de la deuda contraída que pueden coartar más que liberar. En cuanto a las microfinanzas tal como han quedado estructuradas por las instituciones de Washington (a diferencia de la orientación social más filantrópica de los microcréditos propuestos por Yunus), su efecto tiende a generar fuentes muy rentables de ingresos (con tipos de interés por encima del 18 por 100 e incluso bastante más altos) para las instituciones financieras globales, en el seno de una estructura de comercialización emergente que permite a las empresas multinacionales acceder al enorme mercado constituido por los dos mil millones de personas que viven con menos de 2 dólares al día. Es a ese enorme «mercado en la base de la pirámide», como se le llama en los círculos empresariales, al que el gran capital pretende llegar mediante redes complejas de vendedores (principalmente mujeres) vinculados mediante una cadena de mercado que va desde los grandes centros multinacionales de distribución hasta los vendedores callejeros²⁰. Estos últimos, ligados por diversas redes de relaciones sociales, se hacen colectivamente responsables del pago de la deuda más intereses que les permite comprar los artículos que más tarde venden al por menor. Como en el caso de la concesión de derechos de propiedad privados, es casi seguro que algunas personas (la mayoría de ellas mujeres) pueden incluso alcanzar un estatus relativamente acomodado, al tiempo que se atenúan notorios problemas en el acceso de los pobres a los pro-

²⁰ Ananya Roy, *Poverty Capital: Microfinance and the Making of Development*, Nueva York, Routledge, 2010; C. K. Prahalad, *The Fortune at the Bottom of the Pyramid: Eradicating Poverty Through Profits*, Nueva York, Pearson Prentice Hall, 2009.

ductos de consumo a un precio razonable; pero esto no soluciona el problema de la pobreza urbana. La mayoría de los participantes en el sistema de microfinanzas quedarán reducidos a la servidumbre por deudas, encerrados en una posición intermedia mal remunerada entre las empresas multinacionales y la población empobrecida de los arrabales urbanos, en beneficio siempre de las primeras. Este es el tipo de estructura que bloquea la exploración de alternativas más productivas, y ciertamente no brinda ningún tipo de derecho a la ciudad.

La urbanización, podemos concluir, ha desempeñado un papel crucial en la absorción de excedentes de capital, y lo ha hecho a una escala geográfica cada vez mayor, pero a costa de impetuosos procesos de destrucción creativa que implican la desposesión de las masas urbanas de cualquier derecho a la ciudad. Periódicamente esto da lugar a rebeliones como la de París en 1871, cuando los desposeídos se alzaron reclamando el derecho a la ciudad que habían perdido. Los movimientos sociales de 1968, desde París y Bangkok hasta Ciudad de México y Chicago, pretendían parecidamente definir un modo de vida urbana diferente al que les estaban imponiendo los promotores capitalistas y el estado. Si, como parece probable, las dificultades fiscales de la actual coyuntura aumentan y la fase hasta ahora exitosa, neoliberal, posmodernista y consumista de absorción capitalista del excedente mediante la urbanización, está llegando a su fin iniciándose una crisis más amplia, cabe preguntarse: ¿Dónde está nuestro 68, o para plantearlo aún más dramáticamente, nuestra versión de la Comuna?

Por analogía con las transformaciones en el sistema recaudatorio, la respuesta política deberá ser mucho más compleja en nuestra época, precisamente porque el proceso urbano es ahora de ámbito planetario y está atravesado por todo tipo de fisuras, inseguridades y desarrollos geográficos desiguales. Pero como cantaba Leonard Cohen, esas grietas son «las que dejan pasar la luz». Hay atisbos de rebelión en todas partes (la agitación en China e India es crónica, hay guerras civiles en África, Latinoamérica hierve, en todas partes surgen movimientos autónomos y hasta en

Estados Unidos hay indicios políticos que sugieren que la mayoría de la población piensa, con respecto a las terribles desigualdades, que «¡Ya basta!». Cualquiera de esas rebeliones podría de repente hacerse contagiosa. A diferencia del sistema tributario, no obstante, los movimientos de oposición urbanos y periurbanos, que abundan en todo el mundo, no están apenas vinculados entre sí. De hecho, muchos no tienen ninguna conexión con otros. Es por tanto muy improbable que una sola chispa incendie la pradera, como se solía decir en otro tiempo. Hará falta algo mucho más sistematizado. Pero si esos diversos movimientos de oposición se unieran de algún modo –por ejemplo, en torno a la reivindicación del derecho a la ciudad–, ¿qué deberían exigir?

La respuesta a esta última pregunta es bastante sencilla: mayor control democrático sobre la producción y uso del excedente. Dado que el proceso de urbanización es un importante canal de uso, el derecho a la ciudad se constituye estableciendo un control democrático sobre la aplicación a la urbanización de los excedentes. Tener excedentes no es algo malo de por sí; de hecho, en muchas situaciones es crucial para la supervivencia. Durante toda la historia del capitalismo, parte del valor excedente creado ha sido recaudado por el estado, y en las fases socialdemócratas esa proporción aumentó significativamente, poniendo buena parte del excedente bajo el control estatal. Todo el proyecto neoliberal durante los últimos treinta años ha estado orientado a la privatización del control sobre el excedente, pero los datos para todos los países de la OCDE muestran que la proporción del PIB de la que ha dispuesto el estado se ha mantenido en general constante desde la década de 1970. El principal logro del asalto neoliberal ha sido pues impedir que siguiera aumentando como lo hizo durante los años cincuenta y sesenta. Otro aspecto ha sido crear nuevos sistemas de gobierno que integran los intereses del estado y de las empresas, y que mediante la aplicación del poder del dinero aseguran que el control sobre el desembolso del excedente en la configuración del proceso urbano mediante el aparato estatal favorezca al gran capital y a las clases altas.

El aumento de la proporción del excedente bajo control estatal solo servirá de algo si se reforma el propio estado poniéndolo bajo el control democrático del pueblo. El derecho a la ciudad va cayendo cada vez más, por desgracia, en manos de intereses privados o casi privados. En la ciudad de Nueva York, por ejemplo, tenemos un alcalde multimillonario, Michael Bloomberg, que está reconfigurando la ciudad de acuerdo con los intereses de los promotores inmobiliarios, de Wall Street y de la clase capitalista transnacional, mientras la sigue vendiendo como un lugar óptimo para los grandes negocios y un destino fantástico para los turistas, convirtiendo Manhattan en una vasta comunidad de acceso restringido, únicamente para ricos (su eslogan desarrollista ha sido, irónicamente, «construir como Robert Moses pero sin olvidar a Jane Jacobs»²¹). En Seattle es otro multimillonario, Paul Allen, quien lleva la voz cantante, y en Ciudad de México el hombre más rico del mundo, Carlos Slim, ha hecho pavimentar de nuevo las calles del centro para complacer el gusto de los turistas. Pero no son solo ricachones individuales los que ejercen el poder directo: en la ciudad de New Haven, carente de recursos propios para la reinvención urbana, es la Universidad de Yale, una de las más ricas del mundo, la que está rediseñando gran parte del tejido urbano para adecuarlo a sus necesidades. La Universidad Johns Hopkins está haciendo lo mismo en el este de Baltimore y la Universidad de Columbia planea hacerlo en ciertas áreas de Nueva York (suscitando en ambos casos movimientos de resistencia vecinales, como lo ha hecho el intento de privatización del suelo en Dharavi). El derecho a la ciudad actualmente existente, tal como está ahora constituido, es demasiado estrecho y está en la mayoría de los casos en manos de una pequeña elite política y económica con capacidad para configurar la ciudad según sus propias necesidades particulares y sus deseos más íntimos.

²¹ Scott Larson, *Building Like Moses with Jane Jacobs in Mind*, tesis doctoral, Earth and Environmental Sciences Program, City University of New York, 2010.

Pero consideremos ahora la situación más estructuralmente: en enero de cada año se publica una estimación del total de primas [*bonus*] ganadas esforzadamente en Wall Street durante todo el ejercicio por los grandes gestores financieros. En 2007, un año desastroso para los mercados financieros se mire como se mire (aunque no tan malo como el siguiente, claro está), esas primas sumaron 33.200 millones de dólares, solo un 2 por 100 menos que el año anterior (buena retribución por desquiciar el sistema financiero mundial). A mediados del verano de 2007 la Reserva Federal y el Banco Central Europeo inyectaron en el sistema financiero millardos de dólares en créditos a corto plazo para asegurar su estabilidad, y la Reserva Federal redujo espectacularmente los tipos de interés a medida que avanzaba el año cada vez que los mercados de Wall Street amenazaban caer vertiginosamente. Entretanto, entre dos y tres millones de personas –principalmente familias monoparentales encabezadas por mujeres, afro-americanas en las principales ciudades y blancas marginadas en la semiperiferia urbana– eran desahuciadas de sus hogares, quedando muchas de ellas sin techo. En Estados Unidos muchos barrios e incluso comunidades periurbanas enteras quedaron prácticamente vacíos como consecuencia de las prácticas crediticias depredadoras de las instituciones financieras. Esa gente no recibía primas. De hecho, dado que el desahucio significa condonación de la deuda* y que eso es considerado como un ingreso, muchos de los desahuciados tuvieron que afrontar enormes recargos de impuestos por un dinero que nunca estuvo en sus manos. Esa espantosa asimetría plantea la siguiente cuestión: ¿por qué no extendieron la Reserva Federal y el Tesoro estadounidense su ayuda de liquidez a medio plazo a los hogares amenazados con el desahucio hasta que la reestructuración de su hipoteca con un tipo de interés razonable resolviera parte al menos del problema? Se podría haber mitigado la ferocidad de la crisis del crédito y protegido a la gente empobrecida y los barrios que habitaban. Además, el siste-

* No en todas partes, como bien sabemos en España. [*N. del T.*]

ma financiero global no habría estado al borde de la insolvencia total, como sucedió un año después. Evidentemente, esto habría extendido la misión de la Reserva Federal más allá de sus límites habituales y habría violado la regla ideológica neoliberal de que en caso de conflicto entre el bienestar de las instituciones financieras y el del pueblo, este tiene que cargar con los gastos. También habría ido contra los principios de la clase capitalista con respecto a la distribución de los ingresos y la idea liberal de responsabilidad personal. Pero basta considerar el precio que se pagó por observar tales reglas y la insensata destrucción creativa que causaron. ¿No se podría y se debería hacer algo para invertir esas opciones políticas?

Cabe esperar que durante el siglo XXI lleguemos a ver un movimiento coherente de oposición a todo esto. Existen, por supuesto, multitud de luchas y movimientos sociales urbanos (en el sentido más amplio del término, incluyendo los movimientos en la periferia rural), y abundan en todo el mundo las innovaciones urbanas con respecto a la sostenibilidad medioambiental, la incorporación cultural de los inmigrantes y el diseño habitacional de los espacios públicos; pero todavía tienen que converger en el propósito concreto de obtener un mayor control sobre los usos del excedente (por no hablar de las condiciones de su producción). Un paso hacia la unificación de esas luchas, aunque no fuera en absoluto el último, sería el de concentrarse en esos momentos de destrucción creativa en que en la economía de acumulación de riqueza se transfigura violentamente en economía de desposesión, reivindicando abiertamente el derecho de los desposeídos a su ciudad, su derecho a cambiar el mundo, a cambiar la vida y a reinventar la ciudad de acuerdo con sus propios deseos. Ese derecho colectivo, entendido a un tiempo como consigna de trabajo y como ideal político, nos retrotrae a la antiquísima cuestión de quién está al mando de la conexión interna entre urbanización y producción y uso del excedente. Quizá, después de todo, Lefebvre tenía razón, hace más de medio siglo, al insistir en que la revolución de nuestra época tiene que ser urbana, o no será.

CAPÍTULO CINCO

Reclamar la ciudad para la lucha anticapitalista

Si la urbanización es tan decisiva para la acumulación del capital, y si las fuerzas del capital y sus innumerables aliados deben movilizarse incansablemente para revolucionar periódicamente la vida urbana, esto conlleva inevitablemente algún tipo de lucha de clases, se reconozca o no explícitamente como tal, aunque solo sea porque las fuerzas del capital tienen que esforzarse enérgicamente por imponer su voluntad a un proceso urbano y a poblaciones enteras que nunca estarán, ni siquiera en las circunstancias más favorables, totalmente bajo su control. De ahí se sigue una importante cuestión político-estratégica: ¿En qué medida deben centrarse y organizarse explícitamente las luchas anticapitalistas en el amplio terreno de la ciudad y el medio urbano? Y si deben hacerlo, ¿cómo y exactamente por qué?

La historia de la lucha de clases de base urbana es impresionante. Los sucesivos movimientos revolucionarios en París desde 1789 hasta la Comuna de 1871, pasando por 1830 y 1848, constituyen el ejemplo más obvio del siglo XIX. Posteriores acontecimientos incluyen el sóviet de Petrogrado, las comunas de Shanghái de 1927 y 1967, la huelga general en Seattle en 1919, Barcelona en la Guerra Civil española, el cordobazo argentino en 1969, las batallas urbanas en Estados Unidos durante la década de 1960, las movilizaciones urbanas de 1968 (París, Chicago, Ciudad de México, Bangkok y otras, incluidas la llamada «Primavera de Praga» y el auge de las asociaciones de vecinos en Madrid a la cabeza del movimiento antifranquista en aquella misma época); en tiempos más recientes hemos sido testigos de ecos de aquellas luchas en las protestas contra la globalización en Seattle en 1999 (seguida por protestas similares en Quebec, Génova y muchas otras ciu-

dades, como parte de un movimiento general contra la globalización), y más recientemente aún hemos visto protestas de masas en la plaza Tahrir de El Cairo, en Madison (Wisconsin), en la Puerta del Sol en Madrid, en la Plaça de Catalunya en Barcelona y en la plaza Syntagma en Atenas, así como rebeliones revolucionarias en Oaxaca en México, en Cochabamba (2000 y 2007) y en El Alto (2003 y 2005) en Bolivia, junto con otras movilizaciones políticas muy diferentes pero igualmente importantes en Buenos Aires en 2001-2002 y en Santiago de Chile (2006 y 2011).

Y como demuestra la historia, esos acontecimientos no se han producido únicamente en centros urbanos aislados; en varias ocasiones el espíritu de la protesta y la rebelión se ha extendido contagiosa y notablemente a través de las redes urbanas. Puede que el movimiento revolucionario de 1848 naciera en París, pero el espíritu de la rebelión se propagó en pocas semanas a Viena, Berlín, Milán, Budapest, Fráncfort y muchas otras ciudades europeas. La revolución bolchevique en Rusia se vio acompañada por la formación de consejos obreros y «sóviets» en Berlín, Viena, Varsovia, Riga, Munich y Turín, y en 1968 fueron París, Berlín, Londres, Ciudad de México, Bangkok, Chicago y muchas otras ciudades las que experimentaron «jornadas de rabia» y en algunos casos violentas represiones. El desarrollo de la crisis urbana en Estados Unidos durante la década de 1960 afectó simultáneamente a muchas ciudades; y en un momento asombroso pero muy subestimado de la historia mundial, el 15 de febrero de 2003 varios millones de personas se manifestaron simultáneamente en las calles de Roma (en la que fue, con alrededor de 3 millones de personas, la mayor manifestación contra la guerra en toda la historia de la humanidad), Madrid, Londres, Barcelona, Berlín y Atenas, y en número bastante menor (aunque imposible de precisar debido a la represión policial) en Nueva York, Melbourne y casi doscientas ciudades de Asia (a excepción de China), África y Latinoamérica, en una manifestación a escala mundial contra la amenaza de guerra contra Iraq. Ese movimiento, descrito entonces como una de las primeras expresiones de la opinión pública global, se desvaneció

rápidamente, pero dejó tras de sí la sensación de que la red urbana global está repleta de posibilidades políticas que no han sido todavía aprovechadas por los movimientos progresistas. La actual oleada de movimientos juveniles en todo el mundo, desde El Cairo hasta Madrid o Santiago de Chile –por no hablar de la rebelión callejera en Londres, seguida por el movimiento Occupy Wall Street iniciado en la ciudad de Nueva York y que luego se extendió a innumerables ciudades estadounidenses y de todo el mundo– sugiere que hay algo político en el aire de las ciudades que se debate por expresarse¹.

De este breve repaso de los movimientos políticos de base urbana brotan dos preguntas: ¿Es la ciudad (o un conjunto de ciudades) un sitio meramente pasivo o red preexistente, el lugar donde aparecen y se expresan corrientes más profundas de la lucha política? A primera vista podría parecer así; pero también está claro que ciertas características ambientales urbanas son más propicias a las protestas rebeldes que otras, tales como la centralidad de plazas como Tahrir, Tiananmen y Syntagma, la mayor facilidad para erigir barricadas en París comparada con Londres o Los Ángeles, o la situación de El Alto que le permite controlar las principales rutas de abastecimiento a La Paz.

El poder político suele tratar por eso de reorganizar las infraestructuras y la vida urbana atendiendo al control de poblaciones levantiscas. El caso más famoso es el de los bulevares diseñados por Haussmann en París, considerados desde el primer momento como un medio de control militar, pero no es el único. La remodelación del centro de las ciudades en Estados Unidos a raíz de los disturbios urbanos de la década de 1960 tenía como fin crear importantes barreras físicas –de hecho, fosos por los que discurrían

¹ El refrán «el aire de la ciudad libera» [*Stadluft macht frei*] es una conocida sentencia medieval, de cuando las ciudades con una carta de derechos a modo de Constitución podían funcionar como «islas no-feudales en un océano feudal». La exposición clásica al respecto es la de Henri Pirenne, *Medieval Cities*, Princeton, Princeton University Press, 1925 [ed. cast.: *Las ciudades de la Edad Media*, Madrid, Alianza, 1972].

autopistas— entre las ciudadelas de gran valor inmobiliario en el centro y los empobrecidos barrios periféricos cercanos. Los violentos combates de las Fuerzas de Defensa Israelíes con el fin de someter a los movimientos de oposición palestinos en Ramala o más tarde por el ejército estadounidense en Faluya (Iraq), han desempeñado un papel crucial en el replanteamiento de las estrategias militares para pacificar, vigilar y controlar las poblaciones urbanas. A su vez, movimientos de oposición como Hezbollah y Hamas promueven nuevas estrategias de rebelión urbana. La militarización no es, por supuesto, la única solución (y como demostró Faluya, puede estar muy lejos de ser la mejor). Los programas de pacificación planificada en las favelas de Río de Janeiro suponen un enfoque urbanizado de la guerra social y de clases mediante la aplicación de diversas políticas públicas a los barrios más turbulentos. Hezbollah y Hamas, por su parte, combinan las operaciones militares desde dentro de la densa red de emplazamientos urbanos con la construcción de estructuras alternativas de gobernanza urbana, que incluyen desde la recogida de basuras a los subsidios y ayudas sociales y la administración de los barrios.

Lo urbano funciona pues, obviamente, como un ámbito relevante de acción y rebelión política. Las características propias de cada lugar son importantes, y su remodelación física y social así como su organización territorial son armas para la lucha política. Al igual que en las operaciones militares la elección y conformación del campo de batalla desempeña un papel destacado en su resultado, lo mismo sucede con las protestas populares y los movimientos políticos en el entorno urbano².

El segundo punto importante es que se acostumbra a estimar la eficacia de las protestas políticas según su capacidad para trastornar la economía urbana. Durante la primavera de 2006, por ejemplo, la población inmigrante en Estados Unidos desarrolló una agitación general a partir de una propuesta al Congreso para

² Stephen Graham, *Cities Under Siege: The New Military Urbanism*, Londres, Verso, 2010.

criminalizar a los inmigrantes indocumentados (algunos de los cuales llevaban décadas en el país). Las protestas masivas se convirtieron en algo así como una huelga de trabajadores inmigrantes que interrumpió de hecho la actividad económica en Los Angeles y Chicago y tuvo un serio impacto en otras ciudades. Aquella impresionante demostración de poder político y económico de los inmigrantes (tanto legales como ilegales) para perturbar los flujos de producción y circulación de bienes y servicios en importantes centros urbanos contribuyó notablemente a dejar sin efecto la legislación propuesta.

El movimiento por los derechos de los inmigrantes surgió de la nada y se vio marcado por un alto grado de espontaneidad; pero también se desvaneció rápidamente, dejando tras de sí dos logros menores pero quizá significativos, además del bloqueo de la iniciativa legislativa: la formación de una alianza permanente de los trabajadores inmigrantes y la instauración en Estados Unidos de la costumbre de celebrar el 1 de mayo como jornada de afirmación de las reivindicaciones obreras. Aunque esto último pueda parecer puramente simbólico, recuerda no obstante a los trabajadores estadounidenses, organizados y no organizados, su potencialidad colectiva. La rápida disipación del movimiento también dejó clara una de las principales barreras para la materialización de esa potencialidad, en concreto la gran distancia entre sus adherentes, principalmente *hispanos* (latinoamericanos), y los dirigentes de la población afroamericana, que permitió un intenso bombardeo propagandístico de los medios de derechas, repentinamente anegados en lágrimas de cocodrilo sobre las penalidades de los afroamericanos despojados de sus empleos por los inmigrantes ilegales latinoamericanos³.

La rapidez y volatilidad con que han surgido y desaparecido durante las últimas décadas movimientos de protesta masivos exi-

³ Kevin Jonson and Hill Ong Hing, «The Immigrants Rights Marches of 2006 and the Prospects for a New Civil Rights Movement», *Harvard Civil Rights-Civil Liberties Law Review* 42, pp. 99-138.

ge algún comentario. Además de la movilización planetaria contra la guerra en 2003 y el ascenso y caída del movimiento por los derechos de los trabajadores inmigrantes en Estados Unidos en 2006, hay innumerables ejemplos del curso errático y desigual arraigo geográfico de los movimientos de oposición; podemos mencionar aquí la rapidez con que las revueltas en los suburbios franceses en 2005 y los estallidos revolucionarios en muchos países latinoamericanos, desde Argentina en 2001-2002 a Bolivia en 2000-2005, fueron controlados y reabsorbidos en las prácticas capitalistas dominantes. ¿Tendrán mayor arraigo las protestas de los indignados en el sur de Europa en 2011 y el reciente movimiento Occupy Wall Street? Entender la política y el potencial revolucionario de tales movimientos constituye un serio desafío. La fluctuante historia y fortuna del movimiento contra la globalización o alterglobalista desde finales de la década de 1990 también sugiere que nos encontramos en una fase muy particular y quizá radicalmente diferente de la lucha anticapitalista. Ese movimiento, formalizado en el Foro Social Mundial y sus vástagos regionales y cada vez más ritualizado en manifestaciones periódicas contra el Banco Mundial, el FMI, el G-7 (ahora G-20) o casi cualquier encuentro internacional con el tema que sea (desde el cambio climático al racismo o la igualdad de género) es tremendamente maleable y escurridizo, porque más que una organización coherente es «un movimiento de movimientos»⁴. Eso no quiere decir que las formas tradicionales de organización de la izquierda (partidos políticos y grupos militantes, sindicatos y movimientos ecologistas o sociales como el de los maoístas en la India o el de los campesinos sin tierra en Brasil) hayan desaparecido; pero ahora todos parecen flotar en un océano de movimientos opositores más difusos, carentes de una coherencia política global.

⁴ Thomas Mertes (ed.), *A Movement of Movements*, Londres, Verso, 2004; Sara Motta y Alf Gunvald Nilson (eds.), *Social Movements in the Global South: Dispossession, Development and Resistance*, Basingstoke, Hants, Palgrave Macmillan, 2011.

La cuestión más relevante que quiero dilucidar aquí es esta: ¿son las manifestaciones urbanas de todos esos diversos movimientos algo más que meros efectos colaterales de las aspiraciones humanas globales, cosmopolitas o universales, sin ninguna relación específica con las peculiaridades de la vida urbana? ¿O hay algo en el proceso y la experiencia urbana –en las cualidades de la vida urbana cotidiana– bajo el capitalismo que tenga *de por sí* potencial para servir de base a luchas anticapitalistas? Si es así, ¿qué es lo que constituye ese fundamento y cómo se puede movilizar y servir para desafiar los poderes políticos y económicos dominantes del capital, junto con sus prácticas ideológicas hegemónicas y su poderoso yugo sobre la subjetividad política (cuestión esta última que en mi opinión es decisiva)? Con otras palabras, ¿deberían considerarse fundamentales para la política anticapitalista: las luchas en y sobre la ciudad, y sobre las cualidades y perspectivas de la vida urbana?

No diré que la respuesta a esas preguntas sea «obviamente afirmativa», pero creo que vale la pena reflexionar sobre ellas.

Para buena parte de la izquierda tradicional (con lo que me refiero principalmente a los partidos políticos socialistas y comunistas y la mayoría de los sindicatos), la interpretación de la geografía histórica de los movimientos políticos de base urbana se ha visto trabada por suposiciones políticas y tácticas a priori que han llevado a una subestimación e incomprensión de la capacidad de esos movimientos para impulsar un cambio no solo radical sino también revolucionario. Los movimientos sociales urbanos se consideran con demasiada frecuencia como algo separado o subordinado a la lucha de clases anticapitalista enraizada en la explotación y alienación del trabajo vivo en la producción. En caso de valorarlos positivamente, los movimientos sociales urbanos son típicamente imaginados como meros subproductos derivados de esas batallas más fundamentales. En la tradición marxista, por

ejemplo, las luchas urbanas suelen ser ignoradas o menospreciadas como desprovistas de capacidad o importancia revolucionaria, ya que afectan a cuestiones de reproducción más que de producción, o a los derechos, la soberanía y la ciudadanía, y no al valor y al plusvalor del que se apropia la clase capitalista. El movimiento de los trabajadores inmigrantes no sindicados en 2006, según esa argumentación, se limitaba a reivindicar la igualdad de derechos y no tenía como propósito una revolución social.

Cuando una batalla a escala de toda una ciudad adquiere un estatus revolucionario simbólico, como en el caso de la Comuna de París de 1871, se suele presentar (como hizo primero Marx, y aún más enfáticamente Lenin) como un «levantamiento proletario»⁵ más que como un movimiento revolucionario mucho más complejo, animado tanto por el deseo de reivindicar la propia ciudad frente a su apropiación burguesa, como por la deseada liberación de los trabajadores de las fatigas y la opresión de clase en el puesto de trabajo. A mí me parece simbólico que las dos primeras decisiones de la Comuna de París fueran abolir el trabajo nocturno en las panaderías (una cuestión laboral) e imponer una moratoria sobre los alquileres (una cuestión urbana). Los grupos de izquierda tradicionales pueden pues encabezar con éxito luchas de base urbana, aun cuando las interpreten desde su estrecha perspectiva tradicional obrerista. El Socialist Workers Party británico, por ejemplo, dirigió a finales de los años ochenta una batalla victoriosa contra el impuesto de capitación [*poll tax*] de Margaret Thatcher (una reforma impositiva *igualitaria* que golpeaba muy duramente a los más pobres). La derrota de Margaret Thatcher en aquella contienda desempeñó probablemente un papel determinante en su renuncia a seguir dirigiendo el gobierno.

La lucha anticapitalista, en el sentido marxista formal, se plantea fundamentalmente en relación con la abolición de la relación

⁵ Karl Marx y Vladimir Lenin, *The Civil War in France: The Paris Commune*, Nueva York, International Publishers, 1989 [ed. cast.: *La Comuna de París*, Madrid, Akal, 2010].

de clase entre capital y trabajo (en la producción) que permite la apropiación del valor por el capital. Su objetivo último es la abolición de esa relación de clase y de todo lo que la acompaña, no importa donde ocurra. A primera vista ese objetivo revolucionario parece no tener nada que ver con la urbanización en sí; incluso cuando esa lucha se expresa, como suele suceder, en conflictos interétnicos, raciales o de género de base urbana, en los espacios vitales de la ciudad, el criterio fundamental para los marxistas es que una lucha anticapitalista debe en último término referirse a la propia esencia del sistema capitalista, aspirando a extirpar el tumor canceroso de las relaciones de clase en la producción. Aunque supondría una caricatura decir que el movimiento obrero ha privilegiado siempre y en todas partes a los obreros industriales como agentes de vanguardia para el cumplimiento de esa misión, lo cierto es que en las versiones marxistas revolucionarias esa vanguardia debe dirigir la lucha de clases a través de la dictadura del proletariado hacia una tierra prometida en la que se desvanecen el estado y las clases.

Las cosas se han planteado pues a veces de manera un tanto estrecha. Marx argumentaba que las relaciones de dominación de clase en la producción tenían que ser destruidas por los obreros asociados controlando su propio proceso y planes de producción, opinión que reproducía y resumía una larga historia de aspiración política al control obrero, la autogestión, las cooperativas obreras y otros conceptos parecidos⁶, sin que esos planteamientos surgieran necesariamente de ningún intento deliberado de seguir las prescripciones teóricas de Marx (de hecho era casi a la inversa, reflejando estas últimas los primeros) ni tampoco se imaginaran necesariamente en la práctica como una estación intermedia en el recorrido hacia una completa reconstrucción revolucionaria del orden social. Casi siempre surgieron de una intuición básica, a la que los propios trabajadores llegaron en muy diversos sitios y mo-

⁶ Mario Tronti, «Workers and Capital», en libcom.org, publicado originalmente en italiano, 1971.

mentos, de que sería mucho más justo, menos opresivo y más acorde con su propio sentido de autovaloración y dignidad personal, regular sus propias relaciones sociales y actividades productivas, en lugar de someterse a los dictados de un patrón a menudo despótico que les exigía una entrega infatigable de su capacidad para el trabajo alienado. Pero los intentos de cambiar el mundo mediante el control obrero y otros movimientos análogos –tales como los proyectos de propiedad comunitaria, la llamada economía «moral» o «solidaria», sistemas locales de comercio o trueque, la creación de espacios autónomos (el más famoso de los cuales sería hoy día el de los zapatistas mexicanos)– no se han demostrado hasta ahora viables como modelo para construir soluciones anticapitalistas más globales, pese a los nobles esfuerzos y sacrificios para mantener en pie esos proyectos frente a feroces hostilidades y represiones implacables⁷.

La razón principal del fracaso a largo plazo de tales iniciativas para constituir una alternativa global al capitalismo es bastante simple. Todas las empresas que operan en una economía capitalista están sometidas a «las leyes irrefragables de la competencia» que afianzan las leyes capitalistas de la producción y realización de valor. Si alguien ofrece un producto similar al mío con un coste más bajo y no quiero quedarme sin clientes, tengo que modificar mis prácticas de producción para aumentar mi productividad o reducir mis costes de trabajo, bienes intermedios y materias primas. Aunque haya empresas pequeñas y localizadas que puedan eludir por un tiempo esa coerción y trabajar más allá del alcance de las leyes de la competencia (adquiriendo, por ejemplo, el estatus de monopolios locales), la mayoría no pueden hacerlo; por eso las empresas cooperativas o controladas por los trabajadores acaban reproduciendo en algún momento el comportamiento de sus competidores capitalistas, y cuanto más lo hacen menos se distin-

⁷ Immanuel Ness and Dario Azzellini (eds.), *Ours to Master and to Own: Workers' Control from the Commune to the Present*, Londres, Haymarket Books, 2011.

guen sus prácticas. De hecho, puede muy bien suceder que los trabajadores acaben cayendo en un estado de autoexplotación colectiva tan represivo como el que impone el capital.

Además, tal como exponía Marx en el segundo volumen de *El Capital*, la circulación del capital comprende tres procesos particulares, el del dinero, el productivo y el de las mercancías⁸. Ningún proceso de circulación puede sobrevivir, ni siquiera existir, sin los demás: se entrelazan y codeterminan mutuamente. El control de los trabajadores o de colectivos comunitarios en unidades de producción relativamente aisladas difícilmente puede perdurar –pese a la esperanzada retórica autonomista, autogestionaria y anarquista– frente a un entorno financiero y un sistema de crédito hostiles y a las prácticas depredadoras del capital mercantil. El poder del capital financiero y del capital mercantil (el fenómeno Wal-Mart) han resurgido con fuerza en los últimos años (este es un tema muy poco tratado en la teorización de izquierdas contemporánea). Qué hacer con respecto a esos otros procesos de circulación y a las fuerzas de clase que cristalizan en torno a ellos se convierte así en una parte muy importante del problema. Se trata, después de todo, de las fuerzas primordiales a través de las que opera la férrea ley de la determinación capitalista del valor.

La conclusión teórica que se deduce de esto es evidente. La abolición de la relación de clase en la producción depende de la abolición del poder de la ley capitalista del valor para dictar las condiciones de la producción mediante el libre comercio en el mercado mundial. La lucha anticapitalista no debe organizarse y reorganizarse únicamente en el proceso de trabajo, por fundamental que sea este. Debe también tratar de hallar una alternativa política y social al funcionamiento de la ley capitalista del valor en el mercado mundial. Por muchos movimientos comunitarios y de control obrero que puedan surgir de las intuiciones concretas de la gente

⁸ Karl Marx, *El Capital*, Volumen 2, tomo 1, Madrid, Akal, 2000; pp. 31-123. David Harvey, *A Companion to Marx's Capital, Volume 2*, Londres, Verso, de próxima publicación.

que se ocupa colectivamente de la producción y del consumo, cuestionar el funcionamiento de la ley capitalista del valor a escala mundial requiere una comprensión teórica de las relaciones macroeconómicas además de una gran sofisticación técnica y organizativa. Esto plantea el difícil problema de desarrollar una capacidad política y organizativa para movilizar y controlar la organización de la división internacional del trabajo y de las prácticas y relaciones de intercambio en el mercado mundial. El «desacoplamiento» que proponen algunos ahora es prácticamente imposible por diversas razones. En primer lugar, incrementaría la vulnerabilidad frente a las hambrunas locales y a las catástrofes sociales y «naturales». En segundo lugar, la gestión eficaz y la supervivencia dependen casi siempre de la disponibilidad de medios de producción sofisticados. Por ejemplo, la capacidad de un colectivo de trabajadores para coordinar los flujos a lo largo de una cadena productiva (desde las materias primas hasta los productos acabados) depende de la disponibilidad de fuentes de energía y tecnologías, como la electricidad, teléfonos móviles, ordenadores e internet, que proceden de ese mundo en el que predominan las leyes capitalistas de creación y circulación del valor.

Frente a esas dificultades obvias, muchas fuerzas de la izquierda tradicional preconizaron históricamente como principal objetivo la conquista del poder estatal, que a continuación se podría utilizar para regular y controlar el flujo de capital y dinero, para instituir sistemas de intercambio fuera del mercado (y no mercantilizados) mediante una planificación racional, y para establecer una alternativa a las leyes capitalistas de determinación del valor mediante reconstrucciones organizadas y conscientemente planeadas de la división internacional del trabajo. Los países comunistas creados a partir de la Unión Soviética, incapaces de hacer funcionar globalmente ese modelo, prefirieron aislarse tanto como fuera posible del mercado mundial capitalista. El final de la Guerra Fría, el colapso del imperio soviético y la adopción por el gobierno chino de un modelo económico que acepta plenamente la ley del valor capitalista, dieron lugar a un abandono generalizado

de esa estrategia anticapitalista particular como vía factible para la construcción del socialismo. Las ideas de la planificación central –incluso la socialdemócrata– de que el estado podría proteger a la sociedad frente a las fuerzas del mercado mundial mediante el proteccionismo arancelario, la sustitución de importaciones (como en Latinoamérica durante la década de 1960, por ejemplo), políticas tributarias redistributivas y otros dispositivos de bienestar social, fueron abandonadas poco a poco a medida que los movimientos contrarrevolucionarios neoliberales ganaban fuerza en el dominio de los aparatos estatales desde mediados de la década de 1970 en adelante⁹.

La experiencia histórica, bastante decepcionante, del estalinismo y el comunismo centralmente planificado tal como se practicó realmente, y el fracaso en último término del reformismo y el proteccionismo socialdemócratas en cuanto a contrarrestar el creciente poder del capital para controlar el estado e imponer sus planes políticos, han llevado a gran parte de la izquierda contemporánea a concluir, bien que el «aplastamiento del estado» es una condición necesaria para cualquier transformación revolucionaria, bien que organizar la producción y autónomamente fuera del estado es la única vía posible hacia el cambio revolucionario. La tarea política se ha desplazado así a cierta forma de control obrero, comunitario o local, suponiendo de que el poder opresivo del estado puede «decaer» a medida que movimientos opositores de diverso tipo –ocupaciones de fábricas, economías solidarias, movimientos autónomos colectivos, cooperativas agrarias, etcétera– cobran fuerza en la sociedad civil. Esto equivale a lo que se podría llamar una «teoría termitera» del cambio revolucionario: roer los apoyos institucionales y materiales del capital hasta que se derrumbe. No es un término despectivo; las termitas ocultas pueden infligir un daño terrible sin ser detectadas fácilmente. El problema no es la carencia de eficacia potencial; es que tan pronto como hace demasiado obvio y amenazador el daño producido, el capital está dispuesto y

⁹ David Harvey, *A Brief History of Neoliberalism*, cit.

decidido a llamar a los exterminadores (poderes del estado) para neutralizarlo. La única esperanza entonces es que los exterminadores se vuelvan contra sus amos (como ha sucedido a veces en el pasado) o sean derrotados –un resultado bastante improbable excepto en circunstancias tan particulares como las de Afganistán– en el curso de una contienda militar. Desgraciadamente no existe ninguna garantía de que el tipo de sociedad que emerja a continuación sea mejor o menos bárbaro que aquel al que reemplaza.

En el amplio espectro de la izquierda se defienden fieramente (y a veces también ciega y dogmáticamente) las distintas opiniones sobre lo que puede funcionar o no. La crítica hacia cualquier tipo particular de pensamiento o acción provoca a menudo respuestas injuriosas. Toda la izquierda está hechizada por un «fetichismo de la forma organizativa» que lo impregna todo. La izquierda tradicional (de orientación comunista y socialista) defendía genéricamente alguna versión del centralismo democrático (en los partidos políticos, sindicatos, etcétera). Ahora, en cambio, suelen predominar principios como la «horizontalidad» y «ausencia de jerarquía», o visiones de democracia radical y gobernanza de los bienes comunes, que pueden funcionar bien en grupos pequeños pero son imposibles de aplicar a escala de toda una región metropolitana, por no hablar de los siete mil millones de personas que habitan actualmente el planeta. Se formulan dogmáticamente prioridades programáticas como la abolición del estado, como si no fuera necesaria o valiosa ninguna otra forma alternativa de gobernanza territorial. Hasta el venerable anarquista y antiestatista Murray Bookchin, con su teoría del confederalismo, defiende enérgicamente la necesidad de alguna gobernanza territorial, sin la que los zapatistas, por poner un ejemplo reciente, no habrían encontrado sino la muerte y la derrota: aunque su estructura organizativa se suela presentar –falsamente– como totalmente ajerárquica y «horizontalista», toman decisiones mediante delegados democráticamente elegidos¹⁰. Otros

¹⁰ Murray Bookchin, *Urbanization Without Cities: The Rise and Decline of Citizenship*, Montreal, Black Rose Books, 1992.

grupos concentran sus esfuerzos en la recuperación de nociones antiguas e indígenas de los derechos de la naturaleza, o insisten en que deben prevalecer, por encima de la puesta en práctica de una política anticapitalista, las cuestiones de género, raza, anticolonialismo o indigenismo. Todo esto entra en conflicto con la autopercepción dominante dentro de esos movimientos sociales, que tiende a descartar una guía o teoría organizativa general en nombre de un conjunto de prácticas intuitivas y flexibles que surgen «naturalmente» de la situación dada, algo en lo que, como veremos, no están totalmente equivocados.

Además de todo esto, se da una notoria ausencia de propuestas concretas ampliamente acordadas sobre cómo reorganizar la división del trabajo y las transacciones económicas (¿monetizadas?) en el mundo entero para mantener un nivel de vida razonable para todos. De hecho, este problema se elude demasiado a menudo. Como explica el pensador anarquista David Graeber, haciéndose eco de las dudas de Murray Bookchin mencionadas más arriba,

Burbujas temporales de autonomía deben convertirse gradualmente en comunidades libres permanentes. Sin embargo, para que eso suceda, esas comunidades no deben estar totalmente aisladas, ni tampoco pueden tener una relación de pura confrontación con todo su entorno. Tienen que hallar alguna forma de relacionarse con los sistemas económicos, sociales o políticos más amplios que las rodean. Esta es la cuestión más espinosa, porque se ha demostrado extremadamente difícil para la gente organizada sobre líneas radicalmente democráticas integrarse de ningún modo significativo en estructuras más amplias sin tener que realizar infinitas cesiones con respecto a sus principios fundamentales¹¹.

¹¹ David Graeber, *Direct Action: An Ethnography*, Oakland, CAK Press, 2009, p. 239. Véase también Ana Dinerstein, Andre Spicer y Steffen Bohm, «The (Im)possibilities of Autonomy, Social Movement in and Beyond Capital, the State and Development», *Non-Governmental Public Action Program, Working Papers*, London School of Economics and Political Science, 2009.

En este momento de la historia, los procesos caóticos de destrucción creativa capitalista han reducido evidentemente a la izquierda colectiva a un estado de incoherencia fragmentada, por energética que se muestre y por más que erupciones periódicas de movimientos masivos de protesta y la amenaza recurrente de la «política de termita» sugiera que las condiciones objetivas para una ruptura más radical con la ley capitalista del valor están más que maduras para la cosecha.

En el núcleo de todo esto se da un dilema estructural muy simple: ¿cómo puede fusionar la izquierda la necesidad de comprometerse activamente, pero también de crear una alternativa a las leyes capitalistas de determinación del valor en el mercado mundial, al tiempo que promueve la capacidad de los trabajadores asociados para gestionar y decidir democrática y colectivamente lo que tienen que producir y cómo producirlo? Esta es la tensión dialéctica central que ha escapado hasta ahora al anhelo de los movimientos alternativos anticapitalistas¹².

¹² La Corporación Cooperativa Mondragón (MCC) es uno de los casos más instructivos de autogestión obrera que han resistido el paso del tiempo. Fundada en el País Vasco bajo el fascismo, en 1956, agrupa ahora alrededor de 200 empresas. En la mayoría de los casos la diferencia de remuneración entre los cooperativistas no supera la relación 3:1 (aunque en los últimos años esa proporción haya subido en algunos casos hasta 9:1), frente a una relación de 400:1 en la mayoría de las empresas estadounidenses. El conglomerado empresarial opera en los tres circuitos del capital, disponiendo de instituciones de crédito [Caja Laboral] y una cadena de establecimientos de venta al público [Eroski, fruto de la fusión de nueve cooperativas de consumo locales], además de las unidades de producción. Esta puede ser una de las razones que le han permitido sobrevivir. Los críticos de izquierda le reprochan su falta de solidaridad con luchas obreras más generales, así como algunas prácticas explotadoras de subcontratación y las medidas de eficiencia interna consideradas necesarias para mantener la competitividad de la corporación; pero si todas las empresas capitalistas fueran de este tipo, viviríamos en un mundo muy diferente, de forma que no se puede minusvalorar su ejemplo. George Cheney, *Values at Work: Employee Participation Meets Market Pressure at Mondragon*, Ithaca, ILR Press, 1999.

Para que pueda surgir y afianzarse un movimiento anticapitalista viable, hay que reevaluar las estrategias anticapitalistas pasadas y presentes. No solo es vital mirar hacia atrás y pensar sobre lo que se puede y se debe hacer, quién va a hacerlo y dónde, sino que también es vital conciliar los principios organizativos y prácticas preferidas con la naturaleza de las batallas políticas, sociales y técnicas que habrá que librar y vencer. Cualesquiera soluciones, formulaciones, formas organizativas y agendas políticas que se propongan deberán ofrecer respuestas a tres cuestiones principales:

- 1) La primera es la del lacerante empobrecimiento material de buena parte de la población mundial y la consiguiente frustración de la posibilidad del pleno desarrollo de las capacidades y la potencia creativa humana. Marx fue ante todo un eminente filósofo del ilimitado progreso humano, pero reconoció que este solo era posible en «el reino de la libertad que comienza cuando queda atrás el reino de la necesidad». Los problemas de la acumulación global de pobreza no se pueden afrontar, debería ser obvio, sin poner freno a la obscena acumulación mundial de riqueza. Las organizaciones contra la pobreza deben comprometerse a una política contra la riqueza y a la construcción de relaciones sociales alternativas a las que dominan en el capitalismo.
- 2) La segunda cuestión deriva de los claros e inminentes peligros de degradación ambiental y transformaciones ecológicas descontroladas. Esto tampoco es una cuestión solo material, sino también espiritual y moral, que exige un cambio en el concepto humano de la naturaleza así como de la interacción material con ella. No existe una solución puramente tecnológica para esta cuestión. Tiene que haber importantes cambios en el modo de vida (y resarcir los impactos políticos, económicos y ambientales de los últimos setenta años

de colonización periurbana) así como en el consumismo, productivismo y dispositivos institucionales.

- 3) El tercer conjunto de cuestiones, que subyace bajo las dos primeras, deriva de una comprensión histórica y teórica de la inevitable evolución del crecimiento capitalista. Por diversas razones, el crecimiento exponencial es una condición absoluta para la continua acumulación y reproducción del capital. Esta ley de la acumulación sin fin del capital, socialmente construida e históricamente específica, tiene que ser cuestionada y finalmente abolida. El crecimiento acumulativo (con una tasa mínima anual, digamos, del 3 por 100) es sencillamente imposible. El capital ha llegado ahora a un punto de inflexión (lo que no quiere decir a un callejón sin salida) en su larga historia, en el que se está empezando a percibir esa imposibilidad inmanente. Cualquier alternativa anticapitalista tiene que abolir el poder de la ley capitalista del valor para regular el mercado mundial. Esto requiere la abolición de la relación dominante de clase que sostiene y ordena la perpetua expansión de la producción y realización de plusvalor y que es la que produce la distribución cada vez más desigual de riqueza y poder, junto con el perpetuo síndrome de crecimiento que ejerce una presión destructiva tan enorme sobre las relaciones sociales y los ecosistemas globales.

¿Cómo se pueden organizar entonces las fuerzas progresistas para resolver estos problemas y cómo se puede gestionar la dialéctica hasta ahora evasiva entre los imperativos duales del control obrero localizado y la coordinación global? En este contexto quiero regresar a la pregunta fundamental de esta investigación: ¿Pueden desempeñar un papel constructivo los movimientos sociales de base urbana e imprimir su sello a la lucha anticapitalista en esas tres dimensiones? La respuesta depende en parte de algunas reconceptualizaciones fundamentales de la naturaleza de las clases y de una redefinición del terreno de la lucha de clases.

La concepción del control obrero que ha dominado hasta ahora el pensamiento político de la izquierda alternativa es confusa. El foco principal de la lucha se ha situado en el taller y la fábrica como lugar primordial de la producción de plusvalor. Tradicionalmente se ha dado la primacía a la clase obrera industrial como vanguardia del proletariado, su principal agente revolucionario; pero no fueron los obreros fabriles los que generaron la Comuna de París, por ejemplo, lo que ha dado lugar a una visión disidente e influyente de la Comuna según la cual no fue un levantamiento revolucionario ni un movimiento basado en la clase, sino un movimiento social urbano que reclamaba los derechos de ciudadanía y el derecho a la ciudad. Por lo tanto, se dice, no era anticapitalista¹³.

Pero yo no veo razón por la que no se pueda entender a la vez como una lucha de clases y una lucha por los derechos de ciudadanía en el hábitat propio de los trabajadores. Para empezar, la dinámica de la explotación de clase no se limita al lugar de trabajo. Conviene tener en cuenta toda una serie de prácticas predatorias y de desposesión del tipo descrito en el capítulo 2 con respecto al mercado de la vivienda. Estas formas secundarias de explotación, que son y siempre han sido vitales para la dinámica general global de la acumulación de capital y la perpetuación del poder de clase, quedan principalmente a cargo de los comerciantes, propietarios y financieros y sus efectos se dejan sentir principalmente en el hábitat y no en la fábrica. Las concesiones salariales a los trabajadores pueden, por ejemplo, ser recuperadas para el conjunto de la clase capitalista por los propietarios y comerciantes capitalistas, y en las condiciones actuales más despiadadamente aún por los prestamistas, banqueros y financieros. Las prácticas de acumulación por desposesión, la apropiación de rentas por diversos ex-

¹³ Manuel Castells, *The City and the Grassroots*, Berkeley, University of California Press, 1983; Roger Gould, *Insurgent Identities: Class, Community, and Protest in Paris from 1848 to the Commune*, Chicago, University of Chicago Press, 1995. Para mi refutación de esos argumentos, véase David Harvey, *Paris, Capital of Modernity*, cit.

tractores de dinero y beneficio, son causa de la pesadumbre de buena parte de la población con respecto a la calidad de la vida cotidiana. Los movimientos sociales urbanos suelen organizarse precisamente en torno a esas cuestiones, derivadas de las manifestaciones del poder de clase en torno a la forma de vida, y no solo a la explotación del trabajo; pero eso no les quita su contenido de clase, aunque se articulen primordialmente en términos de derechos, ciudadanía y protesta contra las penalidades asociadas a la reproducción social.

El hecho de que esas protestas se manifiesten en la esfera de la circulación del dinero y las mercancías más que en el de la producción no importa; de hecho constituiría una gran ventaja teórica reconceptualizar esas cuestiones dedicando más atención a los aspectos de la circulación del capital que tan frecuentemente obstaculizan los intentos de control obrero de la producción. Dado que lo que importa en conjunto es la circulación del capital (y no solo lo que ocurre en el circuito productivo), ¿qué le importa a la clase capitalista en su conjunto si el valor se extrae de los circuitos comercial y monetario y no directamente del circuito productivo? La distancia entre el lugar donde se produce el plusvalor y aquel donde se realiza es tan crucial en la teoría como en la práctica. El valor creado en la producción puede ser recuperado por la clase capitalista mediante los elevados alquileres que los propietarios de viviendas cobran a los trabajadores por su alojamiento.

En segundo lugar, la propia urbanización es el resultado de una producción en la que participan millones de trabajadores generando valor y plusvalor. ¿Por qué no centrarse pues en la ciudad más que en la fábrica como lugar primordial de la producción de plusvalor? La Comuna de París se puede entonces reconceptualizar como una lucha del proletariado productor de la ciudad que reclamaba el derecho a poseer y controlar lo que había producido. Es (y en el caso de la Comuna de París fue) un tipo muy diferente de proletariado al que gran parte de la izquierda ha asignado típicamente el papel de vanguardia. Se caracteriza por la precariedad, por un empleo episódico, limitado temporalmente y espacialmente

difuso, y muy difícil de organizar sobre la base del lugar de trabajo; pero en este momento de la historia y en los países considerados de capitalismo «avanzado», el proletariado fabril convencional ha disminuido radicalmente, lo que no nos deja más alternativa que lamentar la pérdida de la posibilidad de revolución porque ese proletariado ha desaparecido, o cambiar nuestra concepción del proletariado para incluir en él las hordas de productores no organizados de la urbanización (del tipo de los que se movilizan en las manifestaciones por los derechos de los inmigrantes), y explorar sus peculiares capacidades y poderes revolucionarios.

Así pues, ¿quiénes son esos trabajadores que producen la ciudad? Sus edificadores, los obreros de la construcción en particular, son el candidato más obvio aunque no constituyan la única, ni siquiera la mayor parte de la fuerza de trabajo dedicada a ello. Como fuerza política, los obreros de la construcción han apoyado muy a menudo en los últimos tiempos en Estados Unidos (y posiblemente en otros lugares) el desarrollismo clasista a gran escala que les da de comer, pero no tiene por qué ser siempre así. Los alarifes y albañiles que Haussmann llevó a París desempeñaron un papel importante en la Comuna. El Green Ban [Veto Verde] decretado por la Builders Labourers Federation en Nueva Gales del Sur en la década de 1970 prohibía a sus afiliados trabajar en proyectos que juzgaba medioambientalmente dañinos, y tuvo mucho éxito en sus iniciativas aunque aquel movimiento sindical acabara siendo destruido por una confluencia con el poder estatal de su propia dirección nacional maoísta, que despreciaba las cuestiones medioambientales como una manifestación de sentimentalismo burgués¹⁴.

En cualquier caso, existe una conexión innegable entre la extracción de hierro de las minas, su conversión en acero, la utilización de este en la construcción de puentes, el transporte sobre estos de mercancías y el destino final de estas, ya sean fábricas a

¹⁴ John Tully, «Green Bans and the BLF: The Labour Movement and Urban Ecology», *International Viewpoint* IV 357 (marzo de 2004).

las que llegan como bienes intermedios u hogares donde se consumen. Todas esas actividades (incluido el movimiento espacial) producen valor y plusvalor. Si el capitalismo se suele recuperar de las crisis, como vimos antes, «construyendo casas y llenándolas de cosas», está claro que todos los que participan en la actividad urbanizadora desempeñan un papel decisivo en la dinámica macroeconómica de la acumulación de capital; y si el mantenimiento, reparaciones y sustituciones (a menudo difíciles de distinguir en la práctica) forman parte, de una forma u otra, de la corriente de producción de valor (como explicaba Marx), también está claro que el vasto ejército urbano de trabajadores participantes en esas actividades contribuye igualmente a la producción de valor y de plusvalor, como los miles de trabajadores neoyorquinos que cada día erigen andamios para desmontarlos después. Si, además, el flujo de mercancías desde su lugar de origen hasta su destino final produce valor, como también insistía Marx, igualmente lo hacen los trabajadores empleados en la cadena alimentaria que va desde los productores rurales hasta los consumidores urbanos. Miles de camiones de reparto atestan a diario las calles de Nueva York, y quienes los conducen tienen la capacidad de estrangular el metabolismo de la ciudad. Las huelgas de los trabajadores del transporte (ya sea en Francia durante los últimos veinte años o ahora en Shanghái) son armas políticas extremadamente eficaces (usadas malignamente en Chile en la preparación del golpe de 1973). El sindicato de conductores de autobús en Los Ángeles y la organización de taxistas de Nueva York son ejemplos de organización en las tres dimensiones¹⁵. Cuando la población sublevada de El Alto cortó las principales líneas de abastecimiento a La Paz, obligando a la burguesía a sobrevivir de lo que pudiera tener guardado

¹⁵ Michael Wines, «Shanghai Truckers' Protest Ebbs with Concessions Won on Fees», *New York Times*, 23 de abril de 2011; Jacqueline Levitt y Gary Blasi, «The Los Angeles Taxi Workers Alliance», en Ruth Milkman, Joshua Bloom y Victor Narro (eds.), *Working for Justice: The LA Model of Organizing and Advocacy*, Ithaca, Cornell University Press, 2010, pp. 109-124.

en su despena, pronto obtuvo su objetivo político. Es de hecho en las ciudades donde las clases acomodadas son más vulnerables, no individualmente sino en términos del valor de los bienes que controlan; por eso el estado capitalista no deja de prepararse para luchas urbanas militarizadas como frente avanzado de la lucha de clases en los próximos años.

Consideremos los flujos, no solo de alimentos y otros bienes de consumo, sino también de energía, agua y otros artículos necesarios, así como su vulnerabilidad frente a eventuales disturbios. La producción y reproducción de la vida urbana, aunque parte de ella pueda ser «desestimada» (un término desafortunado), como «improductiva» en el canon marxista, es sin embargo socialmente necesaria como parte de los «*faux frais*» [gastos falsos] de la reproducción de las relaciones de clase entre capital y trabajo. Gran parte de ese trabajo ha sido siempre temporal, precario, itinerante; y muy a menudo escapa al supuesto límite entre producción y reproducción (como en el caso de los vendedores callejeros). Son absolutamente esenciales nuevas normas de organización para esa fuerza de trabajo que produce, y lo que es igualmente importante, reproduce, la ciudad. Ahí es donde aparecen nuevas organizaciones como el Congreso de Trabajadores Excluidos [Excluded Workers Congress] estadounidense, que es una alianza de trabajadores caracterizados por condiciones de empleo temporales e inseguras, a menudo, como sucede con los trabajadores domésticos, espacialmente dispersos por toda una región metropolitana¹⁶.

La historia de las luchas obreras convencionales –y esta es mi tercera tesis importante– también debe ser reescrita. La mayoría de las luchas emprendidas por obreros fabriles resulta tener, inspeccionada más de cerca, una base mucho más amplia. Margaret Kohn, por ejemplo, se queja de que historiadores de izquierdas del movimiento obrero exalten los consejos de fábrica de Turín a prin-

¹⁶ Excluded Workers Congress, *Unity for Dignity: Excluded Workers Report*, Nueva York, Excluded Workers Congress, c/o Inter-Alliance Dialogue, diciembre de 2010.

cipios del siglo XX, ignorando absolutamente sin embargo las «casas del pueblo» donde se configuraba gran parte de su política y desde donde afluían fuertes corrientes de apoyo logístico¹⁷. E. P. Thompson expuso cómo la constitución de la clase obrera inglesa dependía tanto de lo que sucedía en las capillas y en los barrios como en el lugar de trabajo. Los consejos sindicales locales han desempeñado un papel muy subestimado en la organización política británica, y a menudo constituían en muchas ciudades y pueblos la base militante del incipiente partido laborista y otras organizaciones de izquierda que el movimiento sindical nacional a menudo ignoraba¹⁸. ¿Qué éxito habrían tenido las sentadas de Flint (Michigan) en 1937 de no haber sido por las masas de desempleados y organizaciones vecinales a las puertas de General Motors brindándoles incansablemente su apoyo moral y material?

Las organizaciones vecinales han sido tan importantes para el mantenimiento de las luchas obreras como la organización en el lugar de trabajo. Uno de los bastiones de las ocupaciones de fábricas en Argentina tras el colapso de 2001 fue que las fábricas gestionadas de forma cooperativa se convirtieron también en centros culturales y educativos para los vecinos, estableciendo puentes entre la comunidad y en lugar de trabajo. Cuando los antiguos propietarios trataron de expulsar a los trabajadores o de recuperar la maquinaria, todos los vecinos actuaron solidariamente con los trabajadores para evitarlo¹⁹. Cuando el sindicato de hostelería UNITE HERE decidió hace unos años movilizar a los trabajadores de

¹⁷ Margaret Kohn, *Radical Space: Building the House of the People*, Ithaca, Cornell University Press, 2003.

¹⁸ Edward P. Thompson, *The Making of the English Working Class*, Harmondsworth, Middlesex, Penguin Books, 1968 [ed. cast.: *La formación de la clase obrera en Inglaterra*, Madrid, Capitán Swing, 2012].

¹⁹ Peter Ranis, «Argentina's Worker-Occupied Factories and Enterprises», *Socialism and Democracy* 19/3 (noviembre de 2005), pp. 1-23; Carlos Forment, «Argentina's Recuperaed Factory Movement and Citizenship: An Arendtian Perspective», Buenos Aires, Centro de Investigación de la Vida Pública, 2009; Marcela López Levy, *We Are Millions: Neo-liberalism and New Forms of Political Action in Argentina*, Londres, Latin America Bureau, 2004.

base en torno al aeropuerto LAX de Los Ángeles, recurrió a «una amplia alianza con organismos políticos, religiosos y comunales, estableciendo una coalición» que pudo contrarrestar la estrategia represiva de la patronal²⁰. Pero cabe también extraer otras moralejas precautorias: en las huelgas de los mineros ingleses durante las décadas de 1970 y 1980, los que vivían en áreas urbanizadas difusamente como Nottingham fueron los primeros en rendirse, mientras que los de Northumbria, donde convergían las corrientes políticas en el lugar de trabajo y en el lugar de alojamiento, mantuvieron su solidaridad hasta el final²¹. El problema planteado por circunstancias de este tipo será reexaminado más adelante.

En la medida en que los lugares de trabajo convencionales están desapareciendo en muchos lugares del llamado mundo capitalista avanzado (aunque no, por supuesto, en China o en Bangladesh), la organización no solo en torno al trabajo, sino también en torno a las condiciones del hábitat, construyendo puentes entre los dos, se hace cada vez más crucial; pero también lo era en el pasado. Durante la huelga general de Seattle de 1919 las cooperativas de consumo controladas por los trabajadores les sirvieron de apoyo, y cuando la huelga se vino abajo la militancia se desplazó muy marcadamente hacia el desarrollo de un sistema complejo y entrelazado de cooperativas de consumo controladas principalmente por los trabajadores²².

Cuando se amplía la lente para observar el medio social en el que se desarrolla la lucha, se transforma la perspectiva de quiénes podrían ser los proletarios y cuáles sus aspiraciones y estrategias. La composición de género de la política de oposición parece muy di-

²⁰ Forrest Stuart, «From the Shop to the Streets: UNITE HERE Organizing in Los Angeles Hotels», en Ruth Milkman, Joshua Bloom y Victor Narro (eds.), *Working for Justice: The LA Model of Organizing and Advocacy*, Ithaca, Cornell University Press, 2010.

²¹ Huw Beynon, *Digging Deeper: Issues in the Miner's Strike*, Londres, Verso, 1985.

²² Dana Frank, *Purchasing Power: Consumer Organizing, Gender, and the Seattle Labor Movements, 1919-29*, Cambridge, Cambridge University Press, 1994.

ferente cuando se hacen entrar en el cuadro las relaciones fuera de la fábrica convencional, tanto en el lugar de trabajo como en el hábitat. La dinámica social no es la misma en esos dos espacios; en el segundo, las distinciones basadas en el género, la raza, la etnia, la religión y la cultura suelen estar más arraigadas en el tejido social, y las cuestiones de la reproducción social desempeñan un papel más destacado, incluso dominante, en la configuración de la subjetividad y la conciencia política. Recíprocamente, la diferenciación étnica, racial y de género practicada por el capital en la población produce notables disparidades en la dinámica económica de la desposesión en el hábitat (gracias a los circuitos de capital monetario y comercial). Durante el periodo 2005-2009, mientras que la pérdida media de riqueza de los hogares estadounidenses fue del 28 por 100, la de los hispanos fue del 66 por 100 y la de los negros del 53 por 100, mientras que la de los blancos fue solo del 16 por 100. El carácter de clase de las discriminaciones étnicas en la acumulación por desposesión y el efecto diferenciado de esas discriminaciones sobre la vida en unos u otros barrios no podría ser más clara, en particular porque las mayores pérdidas se debieron a la caída del precio de la vivienda²³. Pero es también en los espacios donde se vive donde profundos lazos culturales, basados por ejemplo en la etnia, la religión, patrimonios culturales y memorias colectivas, pueden tanto unir como dividir, creando la posibilidad de solidaridades sociales y políticas en una dimensión totalmente diferente a la que surge típicamente en el lugar de trabajo.

En 1954 guionistas y directores de la famosa lista negra (los llamados Diez de Hollywood), realizaron una maravillosa película titulada *La sal de la tierra*. Basada en acontecimientos reales sucedidos en 1951, mostraba la lucha de los trabajadores mexicano-americanos duramente explotados en una mina de zinc en Nuevo México y de sus familias. Los trabajadores mexicanos reivindicaban igualdad con los blancos, condiciones de trabajo más seguras y ser tratados con

²³ Peter Whoriskey, «Wealth Gap Widens between Whites, Minorities, Report Says», *Washington Post*, Business Section, 26 de julio de 2011.

dignidad (un tema recurrente en muchas luchas anticapitalistas). Las mujeres se sentían irritadas por la poca atención dedicada por el sindicato, formado casi exclusivamente por varones, a cuestiones «domésticas» como el alcantarillado y el agua corriente en sus viviendas. Cuando los trabajadores se pusieron en huelga por sus reivindicaciones, al tener prohibida la formación de piquetes por una de las disposiciones de la ley Taft-Hartley, fueron las mujeres (pese a la oposición de los varones) las que se encargaron de formarlos, mientras los hombres tenían que cuidar de los niños y aprendían así incómodamente lo importante que es el agua corriente y la evacuación de residuos para una vida cotidiana razonable en el hogar. La igualdad de género y la conciencia feminista surgían así como armas cruciales en la lucha de clases. Cuando llegan los sheriffs para desalojar a los huelguistas y sus familias, el apoyo popular de otras familias (claramente basado en solidaridades culturales) no solo les proporciona alimentos, sino que también les permite seguir ocupando sus viviendas, propiedad de la empresa, a la que no le queda al final más remedio que ceder. El enorme poder de la unidad entre género, etnia, trabajo y vida no es fácil de construir, y la película muestra que las tensiones entre hombres y mujeres, entre trabajadores anglófonos y mexicanos y entre perspectivas basadas en el trabajo y en la vida cotidiana son tan significativas como las que se dan entre trabajo y capital. Solo cuando se construye la unidad y paridad entre todas las fuerzas del trabajo, dice la película, se podrá vencer. El peligro que representaba este mensaje para el capital se refleja en el hecho de que fue la única película sistemáticamente proscrita por razones políticas en los cines comerciales estadounidenses durante muchos años. La mayoría de los actores no eran profesionales –muchos de ellos pertenecían al sindicato de mineros–; pero la más brillante actriz profesional, Rosaura Revueltas, fue deportada a México²⁴.

²⁴ James Lorence, *The Suppression of Salt of the Earth: How Hollywood, Big Labor and Politicians Blacklisted a Movie in Cold War America*, Albuquerque, University of New Mexico Press, 1999. La película se puede descargar gratuitamente.

En un libro reciente Bill Fletcher y Fernando Gapasin argumentan que el movimiento obrero debería dedicar más atención a las formas geográficas de organización y no solo a las sectoriales, y que en Estados Unidos debería dar poder a los consejos [comités] centrales de las ciudades junto a la organización sectorial.

En la medida en que las organizaciones obreras hablan de cuestiones de clase, no deberían considerarse como algo separado de la comunidad. El término *laboral* debería aplicarse a todo tipo de organización enraizada en la clase obrera y cuyo programa plantea explícitamente reivindicaciones de la clase obrera. En este sentido, una organización comunitaria enraizada en la clase (tal como un centro obrero) que plantea cuestiones específicas de clase es tan *laboral* como lo puede ser un sindicato. Para decirlo aún más claro, un sindicato que solamente defiende los intereses de un sector de la clase obrera (como un sindicato supremacista blanco) merece menos el nombre de organización obrera que una asociación comunitaria que ayuda a los desempleados o a los sin-techo²⁵.

Por eso proponen un nuevo planteamiento de las organizaciones de clase que

cuestiona esencialmente las actuales prácticas sindicales para establecer alianzas y emprender acciones políticas. De hecho, esta sería su premisa central: *si la lucha de clases no se restringe al lugar de trabajo, tampoco deberían hacerlo los sindicatos*. La conclusión estratégica es que los sindicatos deben procurar organizar las ciudades y no solamente los lugares de trabajo (o sectores industriales). Y organizar las ciudades solo es posible si los sindicatos buscan aliados en los bloques sociales metropolitanos²⁶.

²⁵ Bill Fletcher y Fernando Gapasin, *Solidarity Divided: The Crisis in Organized Labor and a New Path Toward Social Justice*, Berkeley, University of California Press, 2008, p. 174.

²⁶ *Ibid.*

Y prosiguen preguntando: «¿cómo se organiza entonces una ciudad?» Me parece que esta es una de las preguntas clave a las que la izquierda debe responder para revitalizar en los próximos años la lucha anticapitalista. Tales luchas, como hemos visto, tienen una historia meritoria. Las lecciones que dejó la «Bologna Roja» durante la década de 1970 constituyen un capítulo sobresaliente, pero ha habido otros en la historia del «socialismo municipal» e incluso largos periodos de reformas urbanas radicales, como las que tuvieron lugar en la «Viena roja» o los consejos municipales radicales en Gran Bretaña durante la década de 1920, que deben recuperarse tanto desde el punto de vista del reformismo de izquierdas como de otros más revolucionarios²⁷. Una de las paradojas más curiosas de esa historia es que desde la década de 1960 hasta el presente el Partido Comunista francés se distinguiera mucho más en la administración municipal (debido en parte a que en ese terreno no recibía instrucciones derivadas de una teoría dogmática desde Moscú) que en otros aspectos de la vida política. Los consejos sindicales británicos desempeñaron parecidamente un papel decisivo en la política urbana que permitió enraizarse a los partidos de izquierda locales, tradición que se mantuvo en la lucha municipalista contra el thatcherismo a principios de la década de 1980. No fueron únicamente acciones de retaguardia, sino, como en el caso del Consejo de Gran Londres [Greater London Council] encabezado por Ken Livingstone durante ese periodo, potencialmente innovadores, hasta que Margaret Thatcher, reconociendo la amenaza que le suponía la oposición de base urbana, abolió todos esos órganos de gobierno municipales. En Estados Unidos Milwaukee tuvo durante muchos años una administración socialista, y vale la pena señalar que el único socialista elegido para el Senado estadounidense inició su carrera y se ganó la confianza del pueblo como alcalde de Burlington (Vermont).

²⁷ Max Jäggi, *Red Bologna*, Littlehampton, Littlehampton Book Services, 1977; Helmut Gruber, *Red Vienna: Experiment in Working-Class Culture, 1919-34*, Oxford, Oxford University Press, 1991.

Si los participantes en la Comuna de París reclamaban su derecho a la ciudad que habían contribuido colectivamente a producir, ¿por qué no se puede convertir «el derecho a la ciudad» en un eslogan movilizador clave para la lucha anticapitalista? El derecho a la ciudad es, como señalé al principio, un significante vacío lleno de posibilidades inmanentes pero no trascendentes. Eso no significa que sea irrelevante o políticamente impotente; todo depende de que se dé al significante un significado inmanente revolucionario o solo reformista.

Pero no siempre es fácil distinguir entre las iniciativas reformistas y las revolucionarias en el contexto urbano. Los presupuestos participativos de Porto Alegre, programas ecológicamente sensibles o campañas por el salario mínimo vital en muchas ciudades estadounidenses parecen reformistas (y bastante marginales); la iniciativa de Chongqing descrita en el capítulo 2 parece a primera vista una versión autoritaria del socialismo paternalista nórdico más que un movimiento revolucionario. Pero a medida que se extiende su influencia, iniciativas de ese tipo sacan a la luz capas más profundas de posibilidades para concepciones y acciones más radicales a escala metropolitana. Una retórica revitalizada que se va extendiendo (nacida en Brasil en la década de 1990, pero que desde allí se transmitió a Zagreb, Hamburgo o Los Ángeles) sobre el derecho a la ciudad, por ejemplo, parece sugerir que podría estar dando lugar a algo más revolucionario²⁸, y esa

²⁸ Rebecca Abers, *Inventing Local Democracy: Grassroots Politics in Brazil*, Boulder, Lynne Rienner Publisher, 2000. Sobre el movimiento por un salario mínimo vital, véase Robert Pollin, Mark Brenner y Jeanette Wicks-Lim, *A Measure of Fairness: The Economics of Living Wages and Minimum Wages in the United States*, Ithaca, NY, Cornell University Press, 2008. Para casos particulares, véanse David Harvey, *Spaces of Hope*, Edimburgo, Edinburgh University Press, 2000 [en cast.: *Espacios de esperanza*, Madrid, Akal, 2003]; Ana Sugranyes y Charlotte Mathivet (eds.), *Cities for All: Proposals and Expe-*

misma posibilidad sugieren los desesperados intentos de los poderes políticos existentes (por ejemplo, las ONGs e instituciones internacionales, entre ellas el Banco Mundial, reunidas en el Foro Urbano Mundial de Río en 2010) por apropiarse del léxico en cuestión para sus propios propósitos²⁹. Del mismo modo que Marx calificó las restricciones a la duración de la jornada de trabajo como una primera etapa en una vía revolucionaria, reivindicar el derecho de todos a vivir en un domicilio y un entorno de vida decentes puede verse como una primera etapa hacia un movimiento revolucionario más general.

Tampoco tiene sentido quejarse de ese intento de asimilación por parte de los poderosos. La izquierda debería tomarlo como un reconocimiento y combatir por mantener su propio significado inmanente: todos aquellos cuyo trabajo está dedicado a producir y reproducir la ciudad tienen el derecho colectivo, no solo a disponer de lo que producen, sino también a decidir qué tipo de urbanismo se debe producir, dónde y cómo. Hay que elaborar y poner en pie instrumentos democráticos alternativos (distintos a la democracia existente del poder del dinero), del tipo de las asambleas populares, si se quiere revitalizar la vida urbana y reconstruirla fuera de las relaciones de clase dominantes.

El derecho a la ciudad no es un derecho únicamente individual, sino un derecho colectivo concentrado. Incluye no solo a los trabajadores de la construcción, sino también a todos aquellos que facilitan la reproducción de la vida cotidiana: Los cuidadores y maestros, los reparadores del alcantarillado y el suburbano, los fontaneros y electricistas, los que levantan andamios y hacen funcionar las grúas, los trabajadores de los hospitales y los conductores de camiones, autobuses y taxis, los cocineros, camareros y animadores de los restaurantes y salas de fiesta, los oficinistas de los

riences Towards the Right to the City, Santiago de Chile, Habitat International Coalition, 2010.

²⁹ Peter Marcuse, «Two World Forums, Two Worlds Apart», en www.plannersnetwork.org.

bancos y los administradores de la ciudad. Reúne una increíble diversidad de espacios sociales fragmentados con innumerables divisiones del trabajo, en las que caben muy diversas formas de organización, desde los centros obreros y asambleas regionales (como la de Toronto) a las alianzas (como las que se han formado bajo el sello del Derecho a la Ciudad [Right to the City Alliances], el Congreso de Trabajadores Excluidos [Excluded Workers Congress] y muchas otras organizaciones de trabajadores precarios) que proclaman ese objetivo político.

Pero, por razones obvias, también es un derecho complicado, en parte en virtud de las condiciones actuales de la urbanización capitalista, así como de la naturaleza de las poblaciones que pueden aspirar activamente a ese derecho. Murray Bookchin, por ejemplo, era de la opinión (también atribuible a Lewis Mumford y muchos otros influidos por la tradición social del pensamiento anarquista) de que los procesos capitalistas de urbanización han destruido la ciudad como cuerpo político operativo sobre el que se podría construir una alternativa anticapitalista civilizada³⁰. Lefebvre podría estar en cierto modo de acuerdo, aunque él ponía más énfasis en las racionalizaciones del espacio urbano por los burócratas y tecnócratas estatales para facilitar la reproducción de la acumulación de capital y de las relaciones de clase dominantes. El derecho a las urbanizaciones periféricas, en cambio, difícilmente se podría considerar un eslogan anticapitalista defendible.

Por esa razón el derecho a la ciudad tiene que plantearse, no como un derecho a lo que ya existe, sino como un derecho a reconstruir y recrear la ciudad como un cuerpo político socialista con una imagen totalmente diferente, que erradique la pobreza y la desigualdad social y que cure las heridas de la desastrosa degradación medioambiental. Para que esto suceda habrá que interrumpir la producción de las formas destructivas de urbanización que facilitan la perpetua acumulación de capital.

³⁰ Murray Bookchin, *The Limits of the City*, Montreal, Black Rose Books, 1986.

Ese era el tipo de argumento que esgrimía Murray Bookchin para impulsar la creación de lo que llamaba un «libertarismo municipal» sumergido en una concepción biorregional de asambleas municipales asociadas que regularan racionalmente sus intercambios mutuos, así como con la naturaleza. Es en este punto en el que el mundo de la política práctica se solapa fructíferamente con la larga historia del pensamiento utópico sobre la ciudad inspirado en gran medida en el anarquismo³¹.

HACIA LA REVOLUCIÓN URBANA

De esa historia brotan tres tesis. Primera, que las luchas laborales, desde las huelgas hasta las tomas de fábricas, tienen mucha mayor probabilidad de triunfar cuando cuentan con un enérgico y sólido apoyo de fuerzas populares asentadas en el entorno circundante al nivel comunitario (incluido el apoyo de líderes locales influyentes y de sus organizaciones políticas). Esto supone que ya existen o se puedan construir rápidamente fuertes lazos entre los trabajadores y la población local. Tales lazos pueden surgir «naturalmente» del simple hecho de que las familias de los trabajadores constituyen la propia comunidad (como en el caso de muchas comunidades mineras del tipo representado en *La sal de la tierra*); pero en contextos urbanos más difusos tiene que darse un intento político consciente de construir, mantener y reforzar tales lazos. Allí donde tales lazos no existen, como sucedía en el caso de los mineros del carbón en Nottinghamshire durante las huelgas de la década de 1980 en Gran Bretaña, habrá que crearlos; de otro modo es muy probable que tales movimientos fracasen.

³¹ La historia de esta tendencia se inicia con Patrick Geddes, *Cities in Evolution*, Oxford, Oxford University Press (publicado originalmente en 1915), y pasa principalmente por la influyente figura de Lewis Mumford en su *The City in History: Its Origins, Its Transformations, and Its Prospects*, Orlando, Harcourt, 1968.

En segundo lugar, el concepto de trabajo tiene que ampliarse, pasando de una definición estrecha ligada a las formas industriales o fabriles al terreno más amplio del trabajo dedicado a la producción y reproducción de una vida cotidiana cada vez más urbanizada. Las distinciones entre las luchas basadas en el lugar de trabajo y en el que se vive comienzan a diluirse, al igual que la idea de que la clase y el trabajo están definidos únicamente por el lugar de producción y no por el de la reproducción social, principalmente el hogar³². Los encargados de la conducción de agua hasta nuestros hogares son tan importantes en la lucha por una mejor calidad de vida como los que fabrican las tuberías y grifos en la fábrica. Los que transportan los alimentos a la ciudad y los distribuyen (incluidos los vendedores callejeros) son tan relevantes como quienes los cultivan o crían. Quienes cocinan los alimentos (ya sea preparando palomitas de maíz o perritos calientes en las calles o dando el callo en cocinas caseras o a cielo abierto) también añaden valor a esa comida antes de que se digiera. El trabajo colectivo realizado en la producción y reproducción de la vida urbana debe por tanto insertarse más profundamente en el pensamiento y organización de la izquierda. Distinciones que antes podían tener sentido –entre lo urbano y lo rural, la ciudad y el campo– han dejado o van dejando de tenerlo últimamente. La cadena de abastecimiento dentro y fuera de las ciudades supone un movimiento continuo, sin interrupción. Por encima de todo, hay que reelaborar y reformular adecuadamente los conceptos de trabajo y de clase. La lucha por los derechos colectivos de todos los ciudadanos (incluidos los trabajadores inmigrantes) tiene que contemplarse como parte integral de la lucha de clases anticapitalista.

Esta concepción revitalizada del proletariado abraza e incluye a los sectores informales ahora masivos caracterizados por el trabajo temporal, precario y no organizado. Resulta además que los sectores de la población de ese tipo han desempeñado histórica-

³² Ray Pahl, *Divisions of Labour*, Oxford, Basil Blackwell, 1984.

mente un papel protagonista en las rebeliones y levantamientos urbanos. Sus propósitos no siempre han sido de izquierdas (pero tampoco lo han sido siempre los de los sindicatos). A menudo se han dejado arrastrar por líderes carismáticos inestables o autoritarios, ya fueran seculares o religiosos. Por esa razón tales grupos desorganizados han sido a menudo menospreciados por la izquierda convencional como «chusma urbana» (o aún más desafortunadamente, en el vocabulario marxista, como «lumpenproletariado»), a la que había que temer o integrar. Es imperativo que tales sectores de la población sean ahora incluidos y no excluidos como decisivos para la política anticapitalista.

Finalmente, si bien la explotación del trabajo vivo en la producción (en el sentido amplio ya definido) debe seguir siendo un concepto central para cualquier movimiento anticapitalista, las luchas de los trabajadores contra la recuperación y realización del plusvalor en su espacio vital tienen que recibir un trato igual al de las luchas en los diversos puntos de producción de la ciudad. Como en el caso de los trabajadores temporales y precarios, la extensión de la acción de clase en esa dirección plantea problemas organizativos; pero como veremos también abre innumerables posibilidades.

«¿CÓMO SE ORGANIZA ENTONCES UNA CIUDAD?»

La respuesta más honrada a la pregunta de Fletcher y Gapasin es que simplemente no lo sabemos, en parte porque no se ha pensado suficientemente sobre esa cuestión, y en parte porque no existe un registro histórico sistemático de las prácticas políticas en evolución sobre el que basar las generalizaciones. Ha habido, por supuesto, breves periodos de experimentación en la administración socialista del «gas y agua», o utopismos urbanos más audaces como en la Unión Soviética durante la década de 1920³³; pero en

³³ Anatole Kopp, *Ville et Révolution*, París, Editions Anthropos, 1967.

su mayor parte se desvanecieron en el realismo socialista reformista o el modernismo paternalista social-comunista (del que quedan abundantes reliquias conmovedoras en Europa Oriental). La mayor parte de lo que sabemos ahora sobre la organización urbana proviene de teorías convencionales y estudios sobre la gobernanza y administración urbana en el contexto de la gobernanza capitalista burocrática (contra la que Lefebvre clamaba con razón incansablemente), todo lo cual queda muy lejos de la organización de una política anticapitalista. Lo mejor que tenemos a nuestro alcance es una teoría de la ciudad como forma empresarial, con todo lo que esto implica en términos de posibilidades de que la toma de decisiones se realice siguiendo ese modelo (aunque a veces, asumida por fuerzas progresistas, pueda oponerse a las formas más salvajes de desarrollo capitalista y comenzar a resolver las cuestiones más paralizantes y flagrantes de desigualdad social y degradación medioambiental, al menos a escala local, como sucedió en Porto Alegre e intentó Ken Livingstone en el Consejo del Gran Londres). También existe una abundante literatura (habitualmente en estos tiempos laudatoria más que crítica) sobre las virtudes del empresarialismo urbano competitivo, cuando las administraciones urbanas se valen de diversos incentivos para atraer (con otras palabras, subvencionar) la inversión³⁴.

Así pues, ¿cómo podemos empezar a responder a la pregunta de Fletcher and Gapasin? Una forma sería examinar ejemplos particulares de prácticas políticas urbanas en situaciones revolucionarias. Por eso concluiré con una mirada sucinta a los recientes acontecimientos en Bolivia, en búsqueda de claves sobre cómo las relaciones entre las rebeliones urbanas y los movimientos anticapitalistas.

³⁴ Gerald Frug, *City Making: Building Communities without Building Walls*, Princeton, Princeton University Press, 1999; Neil Brenner y Nik Theodore, *Spaces of Neoliberalism: Urban Restructuring in North America and Western Europe*, Oxford, Wiley Blackwell, 2003.

En 2000 las famosas «Guerras del Agua» dieron lugar a una rebelión contra la privatización neoliberal en las calles y plazas de Cochabamba; los planes del gobierno fueron rechazados y se expulsó a dos importantes corporaciones internacionales, Betchel y Suez. Poco después fue en El Alto, una ciudad bulliciosa situada en una meseta 500 m por encima de La Paz, donde surgieron movimientos rebeldes que obligaron a dimitir al presidente neoliberal Sánchez de Lozada en octubre de 2003 y a continuación a su sucesor, Carlos Mesa, en junio de 2005. Todo esto abrió la vía a la victoria electoral a escala nacional de Evo Morales en diciembre de 2005. Fue también en Cochabamba donde se frustró la contrarrevolución intentada por las elites conservadoras en 2007 contra la presidencia de Morales, cuando las autoridades conservadoras de la ciudad se vieron obligadas a abandonarla frente a la cólera de los pueblos indígenas que la habían ocupado.

La dificultad, como siempre, está en entender el papel peculiar que desempeñaron las condiciones locales en esos acontecimientos particulares, y en evaluar qué principios universales (si es que los hay) podríamos deducir de su estudio. Este problema ha venido suscitando interpretaciones enfrentadas de los acontecimientos que rodearon a la Comuna de París de 1871, pero la ventaja de concentrarse en El Alto es que se trata de una lucha todavía viva y que por lo tanto sigue abierta a continuos interrogantes y análisis políticos. Existen ya algunos estudios excelentes sobre los que basar ciertas conclusiones provisionales.

Jeffrey Webber, por ejemplo, ofrece una convincente interpretación de lo sucedido en Bolivia durante la última década, poco más o menos³⁵. Considera los años 2000-2005 como una época genuinamente revolucionaria en una situación de profunda división entre la elite y las clases populares. El rechazo popular a las

³⁵ Jeffrey Webber, *From Rebellion to Reform in Bolivia: Class Struggle, Indigenous Liberation, and the Politics of Evo Morales*, Chicago, Haymarket Books, 2011. Varias fuentes en castellano aparecen citadas en Michael Hardt y Antonio Negri, *Commonwealth*, cit.

políticas neoliberales con respecto al uso de los recursos naturales atesorados por parte del estado, gobernado por una elite tradicional y respaldado por las fuerzas del capital internacional, se fusionaron con una larga lucha de liberación frente a la opresión racial por parte de una población indígena en gran parte campesina. La violencia del régimen neoliberal provocó levantamientos que llevaron a la elección de Morales en 2005. Las elites de siempre (concentradas particularmente en la ciudad de Santa Cruz) desencadenaron a continuación un movimiento contrarrevolucionario contra el gobierno de Morales exigiendo autonomía regional y local, una iniciativa curiosa porque el ideario de la «autonomía local» solo había sido enarbolado hasta ahora en Latinoamérica por la izquierda, como parte de sus luchas de liberación. En Bolivia solía ser una reivindicación de las poblaciones indígenas, y teóricos simpatizantes como Arturo Escobar la consideraban intrínsecamente progresista aunque quizá no estrictamente exigible para cualquier movimiento anticapitalista³⁶. Pero el caso boliviano demuestra que la autonomía local o regional puede ser defendida por cualquier partido que pueda beneficiarse del desplazamiento de la toma de decisiones políticas a la escala particular que más favorece sus intereses. Esto es lo que llevó a Margaret Thatcher, por ejemplo, a abolir el Consejo del Gran Londres, porque era un centro de oposición a su política, y es lo que incitó a las elites bolivianas a buscar la autonomía de Santa Cruz frente al gobierno de Morales, hostil a sus intereses. Después de perder el espacio nacional, trataba de declarar autónomo su espacio local.

Aunque la estrategia política de Morales tras su elección ha contribuido a consolidar el poder de los movimientos indígenas, según Webber ha abandonado la perspectiva revolucionaria de clase surgida en 2000-2005 en favor de un compromiso negociado y constitucional con las elites terratenientes y capitalistas (así

³⁶ Arturo Escobar, *Territories of Difference: Place, Movement, Life, Redes*, Durham, NC, Duke University Press, 2008.

como un acomodo a las presiones imperiales exteriores). El resultado, argumenta Webber, ha sido un «neoliberalismo reconstituido» (con «rasgos andinos») a partir de 2005, más que un avance hacia una transición anticapitalista. La idea de una transición socialista ha sido pospuesta para un futuro lejano. Morales ha asumido sin embargo un liderazgo global en cuestiones medioambientales adoptando la concepción indígena de «los derechos de la madre naturaleza [*Pachamama*]» en la declaración de Cochabamba de 2010 e incorporando esa idea a la Constitución boliviana.

Las opiniones de Webber han sido enérgicamente rechazadas, como cabía esperar, por los seguidores del régimen de Morales³⁷. No estoy en condiciones de juzgar si el giro indudablemente reformista y constitucionalista de Morales a escala nacional es una opción política deliberada, una cuestión de conveniencia o una necesidad impuesta por la configuración de fuerzas de clase que prevalece en Bolivia, respaldada por fuertes presiones imperialistas. Hasta el propio Webber concede que, en el levantamiento campesino de 2007 contra el gobierno autonomista de derechas de Cochabamba, habría supuesto un aventurerismo desastroso que los radicales se enfrentaran al constitucionalismo del gobierno de Morales proscribiendo terminantemente a los funcionarios del gobierno conservador electo que habían huido de la ciudad y sustituyéndolos por una asamblea popular con poderes ejecutivos³⁸.

¿Qué papel desempeñaron las organizaciones urbanas en esas luchas? Esta es una pregunta crucial, dado el papel clave de Cochabamba y El Alto como centros de repetidas rebeliones y el de Santa Cruz como centro del movimiento contrarrevolucionario. En el estudio de Webber El Alto, Cochabamba y Santa Cruz aparecen como meros lugares donde se enfrentaron, casi por ca-

³⁷ Federico Fuentes, «Government, Social Movements, and Bolivia Today», *International Socialist Review* 76 (marzo-abril de 2011); y la respuesta de Jeffrey Webber en el mismo número, «Fantasies Aside, It's Reconstituted Neoliberalism in Bolivia Under Morales».

³⁸ Webber, «Fantasies Aside», cit., p. 111.

sualidad, las fuerzas opuestas de clase y los movimientos populares indígenas; pero en determinado momento señala que «la ciudad informalmente proletaria de El Alto, en un 80 por 100 indígena, desempeñó –con sus ricas tradiciones insurreccionales y marxistas revolucionarias de exmineros “reubicados”, y el radicalismo indígena de los aimaras, quechuas y otros migrantes indígenas del ámbito rural al urbano– el papel más importante en las confrontaciones a veces sangrientas con el estado». También observa que

las rebeliones, en sus mejores momentos, se caracterizaron por movilizaciones desde abajo asambleístas, democráticas y de masas, recurriendo a los modelos organizativos de los mineros del estaño trotskistas y anarco- sindicalistas –la vanguardia de la izquierda boliviana durante gran parte del siglo XX– y diversas variantes de los *ayllus* indígenas –estructuras comunitarias tradicionales– adaptadas al nuevo contexto rural y urbano³⁹.

Pero el relato de Webber apenas nos explica nada más. Ignora en general las condiciones particulares de las diferentes localidades (aunque proporciona un informe detallado de la rebelión de 2007 en Cochabamba) ofreciendo en su lugar un informe genérico de las fuerzas populares y de clase existentes en Bolivia, con el trasfondo de las presiones imperialistas externas. Por eso vale la pena recurrir a los estudios de las antropólogas Lesley Gill y Sian Lazar, que proporcionan descripciones en profundidad de las condiciones, relaciones sociales y formas organizativas que han prevalecido en El Alto en distintos momentos históricos. El estudio de Gill [*Teetering on the Rim*], publicado en 2000, detallaba las condiciones prevalecientes durante la década de 1990, mientras que el de Lazar [*El Alto, Rebel City*], publicado en 2010, se basaba en su trabajo de campo en El Alto antes y después de la rebelión

³⁹ *Ibid.*, p. 48.

de 2003⁴⁰. Ni una ni otra anticipaban la posibilidad de la rebelión antes de que tuviera lugar. Aunque Gill registraba una intensa vida política de base durante la década de 1990, las iniciativas eran tan fragmentadas y confusas (en particular dado el papel negativo de las ONG que habían desplazado al estado como principales proveedores de servicios sociales) que parecía imposible que llegaran a cuajar en un movimiento de masas cohesionado, si bien es verdad que la huelga de maestros que tuvo lugar durante su trabajo de campo se expresaba en términos muy explícitos de conciencia de clase. Lazar también se vio sorprendida por la rebelión de octubre de 2003 y regresó después a El Alto para tratar de reconstruir las circunstancias en que se había desarrollado.

El Alto es un lugar muy especial y es importante señalar sus peculiaridades⁴¹. Es una ciudad relativamente nueva (no dispuso de administración propia hasta 1988) en el inhóspito altiplano, a unos 500 m por encima de La Paz, con una población de aluvión formada principalmente por campesinos expulsados de sus tierras por la progresiva comercialización de la producción agrícola; por obreros industriales desplazados (particularmente de las minas de estaño «racionalizadas», privatizadas y en muchos casos cerradas desde mediados de la década de 1980); y por refugiados de bajos ingresos procedentes de La Paz, donde los elevados precios de la vivienda venían empujando desde hacía unos años a la gente más pobre a buscar acomodo en otro lugar. Así pues, en El Alto no había una burguesía arraigada como en La Paz y en Santa Cruz. Era, como dice Gill, una ciudad «donde muchas víctimas del experimento neoliberal puesto en marcha en Bolivia con las reformas del libre mercado se debaten al borde de la supervivencia». La continua retirada del estado, desde mediados de

⁴⁰ Lesley Gill, *Teetering on the Rim: Global Restructuring, Daily Life, and the Armed Retreat of the Bolivian State*, Nueva York, Columbia University Press, 2000; Sian Lazar, *El Alto, Rebel City: Self and Citizenship in Andean Bolivia*, Durham, Duke University Press, 2010.

⁴¹ Lo que sigue es un resumen extraído de L. Gill, *Teetering on the Rim*, cit., y S. Lazar, *El Alto, Rebel City*, cit.

la década de 1980, de la administración y el abastecimiento de servicios entregados a la privatización neoliberal, significaba que sus controles locales eran relativamente débiles. La población tenía que ingeniárselas y autoorganizarse para sobrevivir o depender de la dudosa ayuda de ONGs complementada por donaciones y favores obtenidos de los partidos políticos a cambio del voto en las elecciones. Pero tres de las principales rutas de abastecimiento a La Paz pasan por El Alto, y la posibilidad de bloquearlas se convirtió en una importante baza en las luchas subsiguientes. El continuo rural-urbano (dominado en gran medida por poblaciones campesinas indígenas con tradiciones culturales y formas de organización social propias, como los *ayllus* que menciona Webber) es un rasgo característico del metabolismo de la ciudad, a medio camino entre la urbanidad de La Paz y la ruralidad de la región circundante, tanto geográfica como etno-culturalmente. Los flujos de gente y de bienes de toda la región pasan por El Alto, y el tránsito diario desde El Alto hasta La Paz hace a esta última muy dependiente de la primera en cuanto a la mano de obra con bajos salarios.

Otros tipos más antiguos o tradicionales de organización colectiva de los trabajadores bolivianos, que constituían «una de las clases obreras más militantes de Latinoamérica», se vieron abandonados en la década de 1980 con el cierre de las minas de estaño⁴². Los mineros desempeñaron un papel clave en la revolución de 1952, que llevó a la nacionalización de las minas de estaño, e igualmente en las movilizaciones que culminaron con el derrocamiento del régimen represivo de Hugo Banzer en 1978. Muchos de los mineros desplazados acabaron en El Alto después de 1985, y según el estudio de Gill experimentaban grandes dificultades para adaptarse a su nueva situación; pero más tarde quedaría claro que su conciencia política de clase, vertebrada por el trotskismo y el anarcosindicalismo, no había desaparecido del todo e iba a convertirse en un importante recurso (aunque cabe discutir su grado

⁴² L. Gill, *Teetering on the Rim*, cit., p. 69.

de importancia) en las luchas posteriores, empezando por la huelga de los maestros en 1995 que Gill estudió en detalle; pero su política cambió en muchos aspectos importantes. Los mineros, sin otra posibilidad que «participar en el trabajo inseguro y mal pagado que realizaba la gran mayoría de los alteños», pasaron de una situación en la que el enemigo de clase y su propia solidaridad estaba clara, a otra en la que tenían que hacerse una pregunta estratégica distinta y mucho más difícil: «¿Cómo podían construir una nueva solidaridad en El Alto a partir de una población étnicamente diversa caracterizada por historias individuales muy diferentes, un complejo mosaico de relaciones de trabajo e intensa competitividad interna?»⁴³.

Esa transición, impuesta a los mineros por la neoliberalización, no es en absoluto exclusiva de Bolivia o El Alto. Plantea el mismo dilema que se les presentaba a los antiguos obreros del acero en Sheffield, Pittsburgh y Baltimore. De hecho es prácticamente universal en todos los centros sacudidos por la vasta oleada de desindustrialización y privatización desencadenada desde mediados de la década de 1970, poco más o menos. Así pues, la forma en que se afrontó en Bolivia tiene un interés algo más que episódico.

Tal como escribe Lazar,

Han surgido nuevos tipos de estructuras sindicales, especialmente entre los campesinos y los trabajadores del sector informal en las ciudades [...] Se basan en coaliciones de pequeños propietarios, incluso microcapitalistas, que no trabajan para un único jefe en un lugar cerrado donde pueden ser fácilmente derrotados por el ejército. Su modelo de producción doméstico genera fluidez e inestabilidad en la vida asociativa, pero también les ha permitido formar alianzas y organizaciones basadas en el emplazamiento territorial; la calle donde venden, el pueblo o región donde viven y cultivan, y con la adición de las estructuras organizativas de *vecinos* en las ciudades, su zona particular.

⁴³ *Ibid*, pp. 74-82.

En esto, la asociación entre gente y lugar ha cobrado gran importancia como origen de lazos comunes. Aunque esos lazos pueden ser a menudo tan antagónicos como armoniosos, los contactos cara a cara son frecuentes, lo que fortalece esos lazos.

Los sindicatos florecen en la economía informal de El Alto y constituyen una parte decisiva de la estructura organizativa civil paralela al estado que configura escalonadamente la ciudadanía, en un contexto en el que la competencia económica interindividual se ve dolorosamente exagerada, por lo que cabría esperar que la colaboración política fuera difícil, si no directamente imposible.

Aunque los movimientos sociales caen a menudo en un agudo faccionalismo y en luchas internas, «están comenzando a construir una ideología más coherente a partir de la particularidad de las diferentes reivindicaciones sectoriales»⁴⁴. La conciencia de clase colectiva residual y la experiencia organizativa de los mineros del estaño desplazados se ha convertido así en un recurso decisivo. Engarzada con prácticas de democracia local basadas en las tradiciones indígenas de toma de decisiones en asambleas locales y populares (los *ayllus*), las condiciones subjetivas para crear asociaciones políticas alternativas estaban en parte dadas. Como consecuencia, «la clase obrera boliviana se está reconstituyendo como sujeto político, *aunque no lo haga en su forma tradicional*»⁴⁵.

Hardt y Negri también destacan ese aspecto en su propia presentación de la lucha boliviana para apoyar su teoría de las *multitudes*:

Todas las relaciones de hegemonía y representación de la clase obrera se ven así cuestionadas. Para los sindicatos tradicionales no es

⁴⁴ Lazar, *El Alto, Rebel City*, cit., pp. 252-254. La teoría de las relaciones conflictivas en el seno de los movimientos sociales aparece desarrollada en Chantal Mouffe, *On the Political*, Londres, Routledge, 2005.

⁴⁵ S. Lazar, *El Alto, Rebel City*, p. 178 [la cursiva es mía, D. H.].

ni siquiera posible representar adecuadamente la compleja multiplicidad de sujetos y experiencias de clase. Este cambio no significa sin embargo un desvanecimiento de la clase obrera ni tampoco un declive de sus luchas, sino más bien una creciente multiplicidad del proletariado y una nueva fisonomía de estas⁴⁶.

Lazar está en parte de acuerdo con esta reformulación teórica, pero ofrece un panorama mucho más matizado de cómo se constituye un movimiento obrero de clase. Tal como ella lo ve, «la afiliación anidada de una alianza de asociaciones, cada una de ellas con formas locales de rendición de cuentas, es una de las fuentes de fuerza de los movimientos sociales en Bolivia». Esas organizaciones suelen ser jerárquicas y a veces autoritarias más que democráticas, pero «si entendemos la democracia como la voluntad del pueblo, el aspecto corporativo de la política boliviana tiene sentido como una de sus tradiciones democráticas más importantes (aunque no necesariamente igualitarias)». Las victorias anticapitalistas como la que permitió expulsar a importantes enemigos empresariales como Bechtel and Suez «no habrían sido posibles sin las experiencias rutinarias de democracia colectiva que forman parte de la vida cotidiana de los alteños»⁴⁷.

La democracia se organiza en El Alto, según Lazar, siguiendo tres líneas peculiares: las juntas vecinales con base territorial no solo proveen bienes colectivos locales, sino que también median en los muchos conflictos que surgen entre los residentes. Esas juntas vecinales están federadas, y la FEJUVE sirve como foro en el que se dirimen los conflictos entre distintos barrios. Se da así una «jerarquía anidada» clásica, en la que existen todo tipo de mecanismos, que Lazar examina en detalle, para asegurar que sus líderes rotan o permanecen fieles a su base (un principio que, hasta que apareció el Tea Party, sería anatema en la política estadounidense).

⁴⁶ M. Hardt y A. Negri, *Commonwealth*, cit., p. 110.

⁴⁷ S. Lazar, *El Alto, Rebel City*, cit., pp. 181, 258.

El segundo engranaje es el constituido por las asociaciones sectoriales de diversos grupos de la población, como los vendedores callejeros, los trabajadores del transporte y muchos otros. También ahí buena parte del trabajo de esas asociaciones consiste en mediar en los conflictos (por ejemplo, entre distintos vendedores callejeros), pero es así como se organizan los trabajadores precarios del llamado «sector informal» (lección que debería aprender el movimiento de «trabajadores excluidos» en Estados Unidos). Esa organización posee tentáculos que llegan hasta la cadena de abastecimiento del pescado y otros alimentos, por ejemplo, desde las áreas próximas. Mediante esos lazos puede movilizar fácil y rápidamente las capacidades insurreccionales de la población campesina y rural circundante, u organizar respuestas inmediatas en la ciudad a las masacres y represiones en el campo. Esos fuertes lazos geográficos se solapan con los de las juntas vecinales que encuadran a muchas familias campesinas inmigrantes, al tiempo que mantienen vivos sus vínculos con sus aldeas de origen.

En tercer lugar existen sindicatos más convencionales, el más importante de los cuales es el de los maestros, que desde la huelga de 1995 ha estado en primera línea de la militancia (como sucedía también en el caso de Oaxaca en México). Los sindicatos tienen una estructura organizativa local, regional y nacional que sigue manteniendo negociaciones con el estado, aunque se vio muy debilitada por el asalto neoliberal al empleo regular y a las formas tradicionales de organización sindical durante los treinta últimos años.

Pero hay algo más en el funcionamiento de El Alto que a Lázar le cuesta mucho integrar en su estudio. Los valores e ideales subyacentes son particularmente fuertes y a menudo se mantienen y articulan mediante acontecimientos y actividades culturales populares –fiestas, ceremonias religiosas, danzas– así como formas más directas de participación colectiva como las asambleas populares (en los barrios y en los sindicatos, formales e informales). Esa solidaridad cultural y memoria colectiva permiten a los sindicatos superar las tensiones «y promover una cohesión corporativa que a su

vez les permite actuar como sujetos políticos eficaces»⁴⁸. La más acusada de esas tensiones es la que se da entre los líderes y la base.

Tanto las formas de organización de base territorial como las sectoriales muestran características similares, en las que las bases populares «intentan afianzar valores colectivos frente al individualismo percibido en sus líderes». Los mecanismos son complejos, pero en el estudio de Lazar aparecen múltiples medios informales mediante los que se afrontan las cuestiones del colectivismo e individualismo o solidaridad y divisionismo. Además, las formas de organización «sindicales» y «comunitarias» no responden a tradiciones distintas sino que a menudo se fusionan culturalmente mediante la «apropiación sincrética de diversas tradiciones políticas, entrelazando sindicalismo, populismo y valores y prácticas democráticas indígenas. Es la combinación creativa de esas tradiciones diferentes la que ha permitido a El Alto superar su marginación política a escala nacional y ocupar el centro de la escena»⁴⁹. Fueron ese tipo de vínculos «los que afloraron en determinados momentos, como en Cochabamba en 2000, los bloqueos campesinos del altiplano de abril y septiembre de 2000, febrero y octubre de 2003 en El Alto y La Paz y de enero a marzo de 2005 en El Alto».

El Alto se ha convertido en un foco tan importante para esta nueva política, tal como afirma Lazar, debido en gran medida a las formas en que se ha constituido en la ciudad el sentido de ciudadanía. Esto cobra relevancia porque presagia la posibilidad de que la rebelión de clase e indígena se organice a través de solidaridades basadas en la ciudadanía común. Históricamente, desde luego, esta ha sido siempre una característica central de la tradición revolucionaria francesa. En El Alto el sentido de pertenencia y solidaridad

se constituye como una relación mediada entre ciudadano y estado configurada mediante las estructuras y organizaciones cívicas colec-

⁴⁸ *Ibid*, p. 178.

⁴⁹ *Ibid*, p. 180.

tivas paralelas al estado al nivel de zona, ciudad y nación. En 1999 el partido político [...] perdió su predominio sobre esas organizaciones y sobre la ciudad en general, lo que permitió que surgiera una actitud más rebelde; esto coincidió con la radicalización de los alteños debida a la creciente penuria económica. Las protestas de septiembre y octubre de 2003 y de los años subsiguientes recibían su fuerza de la coincidencia de esas circunstancias políticas particulares con procesos muy anteriores de identificación con el campo y la construcción de un sentimiento colectivo de pertenencia común.

Lazar concluye que

La ciudadanía en la ciudad indígena de El Alto incluye una combinación de sentimiento urbano y rural, colectivismo e individualismo, igualitarismo y jerarquía. Las visiones alternativas de la democracia que se muestran han reforzado los movimientos indígenas nacionales y regionales en formas que combinan la conciencia de clase y la nacional con la política identitaria, mediante la impugnación de la propiedad de los medios de reproducción social y la naturaleza del estado.

Las dos comunidades que juzga más sobresalientes «se basan en la residencia a escala zonal y de toda la ciudad, y en la ocupación a escala urbana»⁵⁰. Mediante la idea de ciudadanía las relaciones de antagonismo en el lugar de trabajo y en el hábitat se han convertido en una poderosa forma de solidaridad social.

Esos diversos procesos sociales (que Lazar se esfuerza por no idealizar al estilo de la izquierda académica) tuvieron un efecto singular sobre la consideración que la ciudad tiene sobre sí misma. Lazar dice:

Es pertinente preguntarse qué es lo que hace de El Alto una ciudad más que un barrio, un suburbio, un mercado o un nudo de trans-

⁵⁰ *Ibid*, p. 260.

portes. Me respuesta es que distintos agentes, tanto en el sistema estatal como en lugares no estatales, están construyendo una identidad propia y específica para El Alto. Esa identidad no es por supuesto única, pero se está vinculando cada vez más al radicalismo y al indigenismo político.

Y fue «la conversión en acción política de esa identidad y su emergente conciencia política» en 2003 y 2005 la que atrajo sobre El Alto la atención, no solo nacional sino también internacional, como «ciudad rebelde»⁵¹.

La lección a extraer del estudio de Lazar es que es efectivamente posible rescatar una ciudad de los procesos debilitadores de la urbanización neoliberal, reivindicándola para la lucha anticapitalista. Aunque los acontecimientos de octubre de 2003 se deberían entender como «una confluencia altamente contingente de distintos intereses sectoriales que estallaron dando lugar a algo mucho más serio cuando el gobierno ordenó al ejército disparar contra los manifestantes», no se pueden ignorar los años precedentes de organización de esos intereses sectoriales y de apropiación de la ciudad como «centro de radicalismo e indigenismo»⁵². La organización de trabajadores informales en sindicatos tradicionales, la creación de la Federación de Juntas Vecinales, la politización de las relaciones urbano-rurales, la creación de jerarquías anidadas y de estructuras de liderazgo junto con las asambleas igualitarias, la movilización de las fuerzas de la cultura y la memoria colectiva, todo ello proporciona modelos para pensar sobre lo que se podría hacer conscientemente para ganar las ciudades para una lucha anticapitalista. Las formas de organización que confluyeron en El Alto se parecen de hecho mucho a algunas de las formas adoptadas en la Comuna de París (los barrios, los sindicatos, las facciones políticas y el fuerte sentimiento de ciudadanía y de lealtad a la ciudad).

⁵¹ *Ibid*, p. 63.

⁵² *Ibid*, p. 34.

Si bien en el caso de El Alto todo esto se puede ver como resultado de circunstancias contingentes que confluyeron por casualidad, ¿por qué no podemos imaginar la construcción consciente de un movimiento anticapitalista a escala de toda una ciudad siguiendo esas líneas? Imaginemos por ejemplo en la ciudad de Nueva York el resurgimiento de las juntas comunales, adormecidas durante mucho tiempo, como asambleas vecinales con poder de asignación presupuestaria de recursos, junto con una confluencia de una Alianza por el Derecho a la Ciudad, un Congreso de Trabajadores Excluidos y un Consejo Laboral local revitalizado que emprendan la lucha por una mayor igualdad en los ingresos y en el acceso a los servicios de sanidad y alojamiento, tratando de reconstruir la ciudad y el sentimiento de ciudadanía y de justicia social y medioambiental tras el desastre provocado por la urbanización neoliberal al servicio de los capitalistas. La historia de El Alto sugiere que tal coalición solo funcionará si las fuerzas de la cultura con una tradición políticamente radical (que ciertamente existe en Nueva York, pero también en Chicago, San Francisco o Los Ángeles) pueden movilizarse para impulsar a los ciudadanos (por divididos que estén, como siempre sucede en Nueva York) en favor de un proyecto de urbanización radicalmente diferente al dominado por los intereses de clase de los promotores y financieros decididos a «construir como Robert Moses pero sin olvidar a Jane Jacobs».

Pero esas posibilidades tan prometedoras para el desarrollo de la lucha anticapitalista pueden frustrarse y la montaña que parecía amenazar una erupción volcánica puede parir solo un ratón, ya que como también demuestra el caso boliviano, por poco acertado que esté Webber, es que cualquier movilización anticapitalista manifestada en sucesivas rebeliones urbanas tiene que consolidarse en determinado momento a un nivel más alto de generalidad, so pena de estancarse al nivel del estado en un reformismo parlamentario y constitucional que no servirá más que para reconstituir el neoli-

beralismo desde los intersticios de la prolongada dominación imperial. Esto plantea problemas más generales, no solo sobre el estado y sus dispositivos institucionales del derecho, la administración y el mantenimiento del orden, sino sobre el sistema interestatal en el que están insertos todos los estados. Gran parte de la izquierda contemporánea se muestra renuente, desgraciadamente, a plantearse esas cuestiones, por más que las luchas hagan surgir de cuando en cuando algún tipo de macroorganización como el «confederalismo» radical de Murray Bookchin o la «gobernanza policéntrica» más suave de Elinor Ostrom, que se parece sospechosamente a un sistema estatal, suena como un sistema estatal y casi seguramente actuaría como un sistema estatal fueren cuales fueren las intenciones de sus promotores⁵³. Igualmente incoherente parece la alternativa de Hardt y Negri en *Commonwealth*, cuando en la página 361 demuelen el estado y este resurge indemne en la 380 como garante de un nivel de vida mínimo universal, así como de una sanidad y educación universal⁵⁴.

Pero es precisamente a ese respecto al que resulta crucial la forma en que se organiza toda una ciudad. Libera a las fuerzas progresistas del encierro organizativo al micronivel de los colectivos obreros en lucha y las economías solidarias (por importantes que puedan ser), y nos impone una forma totalmente diferente de teorizar y practicar la política anticapitalista. Una perspectiva crítica permite precisamente ver por qué tienen que fracasar tanto el «gobierno policéntrico» preferido por Ostrom como el libertarismo municipal «confederal» de Bookchin. «Si toda sociedad se organizara como una confederación de municipios autónomos –dice Iris Young–, ¿eso impediría el desarrollo de la injusticia y la desigualdad a gran escala entre comunidades [del tipo descrito en el

⁵³ Murray Bookchin, *Remaking Society: Pathways to a Green Future*, Boston, South End Press, 1990; «Libertarian Municipalism: An Overview», *Society and Nature* 1 (1992), pp. 1-13; Elinor Ostrom, «Beyond Markets and Status: Polycentric Governance of Complex Economic Systems», *American Economic Review* 100 (2010), pp. 641-672.

⁵⁴ M. Hardt y A. Negri, *Commonwealth*, cit.

capítulo 3] y con ellas de la opresión de los individuos no pertenecientes a las comunidades más privilegiadas y más poderosas?»⁵⁵. La única forma de evitarlo es que alguna autoridad más alta obligue a determinadas transferencias entre municipios que iguallen al menos los oportuidades, y quizá también los resultados. Esto es lo que el sistema confederal de municipios autónomos de Bookchin sería seguramente incapaz de conseguir, en la medida en que al pueblo se le niega la posibilidad de hacer política y de gobernar a ese nivel, limitándolo a la administración y el gobierno de las cosas. La única forma de establecer reglas generales para la redistribución de la riqueza entre municipios sería, bien mediante el consenso democrático (que, por lo que nos enseña la experiencia histórica, es improbable que sea voluntario y que se llegue a él informalmente) o por sujetos democráticos con poderes de decisión a distintos niveles dentro de una estructura de gobierno jerárquica. Evidentemente, no hay ninguna razón para que todo el poder fluya hacia abajo en tal jerarquía, y seguramente se pueden ingeniar mecanismos para evitar la dictadura o el autoritarismo. Pero el hecho es que ciertos problemas, por ejemplo el de la redistribución de la riqueza, solo resultan visibles a cierta escala, a la que deben por tanto tomarse decisiones democráticas.

Desde ese punto de vista, las movilizaciones bolivianas podrían quizá mirar hacia el sur en busca de inspiración, viendo cómo el movimiento inicialmente concentrado en Santiago de Chile se ha transformado, pasando de la reivindicación estudiantil de una enseñanza pública libre y gratuita, a una alianza antineoliberal de movimientos que exigen una reforma constitucional del estado, una mejora de las pensiones, nuevas leyes laborales y un sistema fiscal personal y empresarial progresivo para comenzar a invertir el deslizamiento hacia una mayor desigualdad social en la sociedad civil chilena. La cuestión del estado, y en particular del tipo de estado (o equivalente no capitalista), no se puede evitar ni si-

⁵⁵ Iris Marion Young, *Justice and the Politics of Difference*, Princeton, Princeton University Press, 1990.

quiera desde el profundo escepticismo contemporáneo, tanto en la izquierda como en la derecha del espectro político, sobre la viabilidad o deseabilidad de tal tipo de institución.

La esfera de la ciudadanía y los derechos, en relación con algún cuerpo político de orden más elevado, no se opone necesariamente a la de las clases y la lucha entre ellas. Conciudadano y camarada pueden avanzar juntos en una lucha anticapitalista, aunque a menudo trabajen a distinta escala; pero eso solo puede ocurrir si nos hacemos, como urgió hace mucho tiempo Robert Park, más «conscientes de la naturaleza de nuestra tarea», que es construir colectivamente la ciudad socialista sobre las ruinas de la destructiva urbanización capitalista. Esa es la atmósfera ciudadana que puede liberar verdaderamente a la gente; pero exige una revolución en el pensamiento y la práctica anticapitalistas. Las fuerzas progresistas anticapitalistas pueden saltar más fácilmente a través de las redes urbanas hacia coordinaciones globales que aun siendo jerárquicas no sean monocéntricas, corporativas y aun así democráticas, igualitarias y horizontales, sistémicamente anidadas y federadas (imaginemos una liga de ciudades socialistas al estilo de la antigua liga hanseática que promovió el desarrollo del capitalismo mercantil), internamente discordante y cuestionada, pero solidaria frente al poder de la clase capitalista, y sobre todo profundamente comprometida en la lucha por socavar y finalmente derrocar el poder de las leyes capitalistas del valor en el mercado mundial para dictar las relaciones sociales bajo las que trabajamos y vivimos. Tal movimiento debería abrir la vía a la prosperidad humana universal, más allá de las restricciones de la dominación de clase y de las determinaciones comercializadas del mercado. El mundo de la verdadera libertad solo puede comenzar, como insistía Marx, cuando se dejen atrás tales restricciones materiales. Reivindicar y organizar las ciudades para la lucha anticapitalista sería un buen punto de partida.